

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO

ARGENTINA





Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Esta es una publicación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Países.

**SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO**

ARGENTINA

El 4% del PBI de América Latina y el Caribe proviene del sector extractivo, un porcentaje equivalente al generado por la agricultura en la región. Para impulsar crecimiento sostenible, es necesario un relacionamiento efectivo entre gobiernos, empresas y sociedad civil. En este diagnóstico de Argentina, el BID busca dar luz a las buenas prácticas entre actores del sector extractivo sobre acciones de información, diálogo, consultas, colaboración y alianzas que están generando desarrollo en el país.

El presente cuadernillo se enfoca en los hallazgos de Argentina y forma parte del diagnóstico regional que fue realizado en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. La publicación completa está disponible en: <https://publications.iadb.org/es/sector-extractivo-y-sociedad-civil-cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es>

Publicación elaborada gracias al Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) financiado por el Gobierno de Canadá

Liderazgo, coordinación de equipos y contenidos

Flavia Milano, Especialista Senior en Operaciones/Sociedad Civil, Vicepresidencia de Países, BID – Líder de Proyecto

Revisión y ajuste de contenidos

Martin Walter, Especialista de la Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID
Maria Dolores Vallenilla Sosa, Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID

Ediciones:

Irene Irazábal Briceño, Vicepresidencia de Países, BID
Viviane Espinoza, Vicepresidencia de Países, BID

Coordinación e investigación general:

Volker Frank (Fundación Futuro Latinoamericano)
Javier Caravedo (ProDiálogo)
Iván Ormachea (ProDiálogo)
Mitzy Canessa (Grupo de Diálogo Latinoamericano)
Bruno Gomes (Grupo de Diálogo Latinoamericano)

Equipo de investigación por país

Roberto Sarudiansky, Fundación EMPREMIN - Investigador y punto focal caso Argentina
María Gabriela Strazzolini, Fundación EMPREMIN - Investigadora y punto focal caso Argentina

Especial agradecimiento

La líder de proyecto, el equipo de coordinación e investigadores país dan su especial agradecimiento y recordatorio a José Luis Lopez Follegatti, promotor del diálogo sobre minería y desarrollo sostenible en el Perú, quien en vida participó y jugó un rol importante para la conformación de este equipo y el desarrollo exitoso de esta investigación.

Contenido*

1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO REGIONAL	4
1.1. LOS TRES ACTORES INVOLUCRADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	9
1.1.1. Empresas extractivas	9
1.1.2. Gobierno	11
1.1.3. Sociedad Civil	15
1.2. LOS COSTOS DE LOS CONFLICTOS	17
2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	20
2.1. ARGENTINA	22
2.1.1. Cuadro de Resumen	22
2.1.2. Introducción	24
2.1.3. Buenas prácticas	25
2.1.4. Análisis de actores	38
2.1.5. Marco legal	41
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO REGIONAL	43
3.1. CONCLUSIONES	44
<i>Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores</i>	44
<i>Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento</i>	44
<i>Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador</i>	45
<i>Sobre los principales actores</i>	45
<i>Sobre los temas abordados en las prácticas</i>	46
<i>Sobre el relacionamiento</i>	47
<i>Sobre las prácticas de relacionamiento</i>	48
3.2. RECOMENDACIONES	50
<i>Para las empresas</i>	50
<i>Para la Sociedad Civil</i>	51
<i>Para el Estado</i>	52
<i>Para los tres actores</i>	53

*La tabla de contenidos de este cuadernillo mantiene la numeración original del diagnóstico regional.

Siglas y acrónimos

ACM	Asociación Colombiana de Minería
ACP	Asociación Colombiana de Petróleo
AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AMEXHI	Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
AMSA	Antofagasta Minerals
AMUCEP	Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
ANDI	Asociación de Industriales de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEM	Cámara Argentina de Empresarios Mineros
CAMIPE	Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Inc.
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CEMDA	Centro Mexicano en Derecho Ambiental
CERFORMOMALI	Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc.
CFE	Consejo Federal de Energía
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CITT	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
CMAP	Comité de Monitoreo Ambiental Participativo
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
COFEMA	Consejo Federal del Ambiente
COFEMIN	Consejo Federal de Minería
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CORMIDOM	Corporación Minera Dominicana
CVSA	Cerro Vanguardia SA
DGM	Dirección General de Minería
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
ENTRE	Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FALCONDO	Falconbridge Dominicana
FARN	Fundación Ambiente y Recursos Naturales
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano
FOMISAR	Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez
GDL	Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible
GDMDS	Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible
GMN	Grupo Multipartícipe Nacional de EITI
ICMM	International Council on Mining and Metals
IED	Inversión Extranjera Directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
LWR	Lutheran World Relief
MAC	Asociación Minera de Canadá
MBV	Mesa de Buenos Vecinos
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MSX	Minera San Xavier

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PACMA	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
PAE	Panamerican Energy
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGS	Plan de Gestión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PUCP	Universidad Católica del Perú
PVDC	Pueblo Viejo Dominicana Corporation / Barrick Pueblo Viejo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SMCV	Sociedad Minera Cerro Verde SAA
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SODOGEO	Sociedad Dominicana de Geología.
SPH	Sociedad Peruana de Hidrocarburos
TSM	iniciativa “Hacia una minería sustentable”
UAGRO	Universidad Autónoma de Guerrero
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
UTECO	Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

1. INTRODUCCIÓN

Los países ricos en recursos naturales y la consiguiente actividad extractiva de esos recursos no renovables -minerales, petróleo y gas-, impulsan varias perspectivas de aproximación. El análisis económico permite estimar los costos de inversión, la rentabilidad de las empresas y los aportes con los que el sector extractivo contribuye a la economía de una nación o región. Desde un punto de vista de adelantos tecnológicos, las industrias extractivas requieren el empleo de sofisticadas tecnologías de punta con el potencial de contribuir a reducir impactos adversos. Desde lo ambiental, por la dimensión propia de este tipo de proyectos, se habla de los impactos de las actividades extractivas en la naturaleza y la biodiversidad, la competencia por el uso de recursos hídricos, las consecuencias en los cultivos y la posible contaminación de ríos o fuentes acuíferas y donde, las tecnologías mencionadas, pueden jugar un papel decisivo en las medidas de ahorro y mitigación.

Desde la perspectiva social se requiere una sofisticación no menor para abarcar y analizar oportunidades y desafíos entre los actores involucrados, frente a las diferentes fases de los grandes proyectos, como la exploración, explotación y cierre, especialmente respecto a las comunidades aledañas¹.

El diagnóstico que se presenta a continuación se acerca al sector extractivo desde una perspectiva de relacionamiento entre los principales actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y las Comunidades afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva. El diagnóstico se aleja de un enfoque clásico hacia las actividades extractivas como “de maldición de los recursos naturales” para investigar y poner en evidencia aquellos hallazgos donde el relacionamiento de actores efectivo representó una oportunidad de desarrollo.

El diagnóstico como línea inicial partió de información conocida basada en estudios previos y experiencia de campo, repasando que la actividad extractiva conlleva el involucramiento de esos tres actores en diferentes capacidades: (i) el **gobierno** y su rol a nivel nacional, provincial y/o municipal respecto a los pasos relacionados con la actividad extractiva como el diseño y asignación de pliegos de licitación, autorizaciones, monitoreo de implementación, con un lapso temporal de influencia de las decisiones políticas (en ausencia de instituciones que respalden dichas decisiones) más breve comparado con los otros dos actores, (ii) la **empresa** que por la naturaleza de la actividad extractiva a largo plazo permanece en el terreno por periodos en general comprendidos por decenios y que luego de



¿Cómo los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?





obtenidas las autorizaciones y licencias (incluida la social), se emplaza geográficamente y pasa a formar parte de la vida de las comunidades aledañas a la zona de extracción. Esta particularidad no menor que define a la actividad extractiva, tiene una influencia en el tejido social y la economía local con impactos en la composición de los grupos tradicionales: (iii) las **comunidades**, además de ser responsables de dar información y comprender el alcance del proyecto para otorgar, la licencia social para operar permanecen en el terreno por generaciones y mantienen un relacionamiento en cada fase de la actividad (tratándose de extracciones “onshore”, desde la apertura al cierre de actividades). La actividad extractiva puede aportar oportunidades a las comunidades y también pueden conllevar nuevas tensiones al interno de la propia población. Entre estas oportunidades y tensiones estaría la empleabilidad de trabajadores provenientes de las comunidades. Por los requerimientos específicos y perfil técnico esta empleabilidad tiende a ser baja, generándose mayor competitividad por puestos de servicios. En ocasiones esta circunstancia puede abrir una brecha entre aquellos trabajadores provenientes de las comunidades versus miembros de la misma comunidad sin trabajo en la empresa. Las comunidades son susceptibles de fracturas internas donde no existían conflictos con anterioridad. Este factor también viene con el arribo de trabajadores fuera de la comunidad que generan un aumento significativo de la población local con nuevos habitantes en la zona y ajenos a las tradiciones y ritmos rurales. Esta circunstancia a su vez genera una natural presión sobre un mismo territorio y respecto a los mismos recursos. Nuevas construcciones de infraestructura y los tiempos

de obras que afectan la circulación al interno de las comunidades, son también otros de los conflictos registrados como así; posible aumento del consumo de alcohol; desbalance del número de hombres respecto a mujeres; potencial aumento de crímenes de género; inicio o aumento de actividades de prostitución. Mención aparte merece la capacidad de la empresa de influir en la cadena de valor con diferentes emprendimientos y organizaciones de servicios que pueden crecer en oportunidades de desarrollo por la llegada de la empresa y que también, en muchos casos, dejan a la empresa extractiva a merced de la fijación monopólica de los precios de esos servicios.

¿Cómo las partes involucradas pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?

Para responder a esa pregunta, el presente diagnóstico se enfocó en estudiar las buenas prácticas de relacionamiento, que han conseguido tanto resultados medibles y comparables susceptibles de ser replicados, como nuevos emprendimientos productivos o avances significativos como por ejemplo en sectores de educación y salud como también impactos intangibles como la generación de confianza y procesos de colaboración. El enfoque busca evidenciar lo que sí funciona en una actividad que representa para algunos de los países ricos en recursos naturales más del 50% de sus ingresos fiscales². Las buenas prácticas que se reúnen en esta publicación dan pautas y orientaciones para consolidar y mejorar el relacionamiento entre los tres actores y muestran caminos innovadores, por los que el sector extractivo pueda aportar al desarrollo nacional y local en los países de América Latina y el Caribe.



**La actividad extractiva
representa para
algunos de los países
ricos en recursos
naturales más del 50%
de sus ingresos fiscales.**

Las buenas prácticas muestran que un buen relacionamiento genera confianza, logra acuerdos sobre temas en disputa, fortalece la economía local, genera prácticas ambientalmente sostenibles y mejora la calidad de vida de la población. Las propias buenas prácticas también indican que el relacionamiento de actores es el resultado de procesos donde se requiere una visión de mediano y largo alcance, adherida a la asignación e inversión de recursos humanos y financieros.

Para este diagnóstico se seleccionaron países de la región ricos en recursos naturales con diferentes perfiles y experiencia en temas extractivos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.

Para la elaboración de este estudio se validaron las experiencias encontradas, triangulando las mismas con representantes de industria/empresa, comunidades/sociedad civil y gobiernos, para asegurar su acuerdo respecto a la experiencia considerada como buena práctica según criterios anteriormente definidos³. Ulteriormente, se realizó una segunda validación mediante diferentes fuentes de información como material escrito, entrevistas, visitas de campo y mesas de trabajo.

A fin de ordenar el universo de experiencias se agruparon metodológicamente los hallazgos en cinco niveles de relacionamiento⁴.



Información:

Este nivel comprende la entrega de datos y referencias sobre el proyecto extractivo por parte de la empresa y del gobierno. También, incluye la facilitación de información por parte de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre el territorio y los portadores de interés.



Diálogo:

El diálogo se refiere al intercambio activo, continuo e informal que a partir de diversos grados de contacto entre los actores en torno al sector extractivo busca crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones.



Consulta pública⁵:

La consulta se considera un proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto extractivo.



Colaboración

Son las acciones en las que las comunidades, la empresa extractiva o gobierno elabora productos de conocimiento o en las que la misma comunidad participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado que beneficie el crecimiento económico local.



Alianza

Son las acciones en las que se incluyen y financian comunidades para que sean estas las encargadas de implementar un proyecto o componente proyecto en torno al proyecto extractivo.

1.1. Los tres actores involucrados con las actividades extractivas

1.1.1. Empresas extractivas

El término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas – que tienen como objetivo extraer recursos naturales⁶. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala.

Las empresas extractivas operan en las zonas de periferia del mundo, cotizan en los mercados de valores internacionales, emplean tecnologías de punta, e interactúan localmente con los gobiernos y comunidades. A nivel mundial, las empresas extractivas asociadas en su mayoría en gremios globales, vienen impulsando un conjunto de iniciativas para fortalecer su relacionamiento con las comunidades locales. La industria minera cuenta con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que lidera el campo de la responsabilidad social en el sector⁷. Es una organización conformada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable. ICMM, fundada en 2001, reúne a 23 de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como 34 asociaciones regionales, nacionales y de *commodities*. Dichas empresas y asociaciones se comprometen a mejorar su rendimiento en el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que se necesita a nivel social⁸.

Igualmente, la industria hidrocarburífera, cuenta con la "International Association of Oil & Gas Producers" fundada en 1999 como la voz de la industria líder global⁹. Los miembros de la asociación producen más de un tercio del petróleo y gas que consume el mundo. La asociación opera apoyando a los reguladores de la industria para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental y social. Es también un espacio único donde los miembros de la asociación intercambian conocimientos y buenas prácticas para mejorar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social¹⁰.



Para las industrias, la presencia de los gobiernos con regulaciones claras y el relacionamiento efectivo con la población local son elementos claves para la inclusión de los interesados en el mejor éxito de las operaciones. La experiencia ha enseñado que las empresas buscan un proceso continuo de relacionamiento con las comunidades locales, en miras a construir confianza y tener un apoyo de la mayoría de la población para el avance del proyecto extractivo. Existe una tendencia creciente por la que las empresas consideran a la población como un aliado potencial para la implementación del proyecto, y con la cual es necesario construir confianza, desarrollar vías de comunicación efectiva y acordar normas de un relacionamiento que implique resultados e impactos positivos para todos los actores involucrados¹¹.

Gracias a los resultados del presente diagnóstico pudo constatarse que la mayoría de las empresas fomentan una interacción con las comunidades que va más allá de compartir informaciones o mantener diálogos informales y promueven y elaboran planes de relacionamiento que ayudan a minimizar el impacto negativo y aumentan las oportunidades económicas y sociales que se abren con el proyecto extractivo. En esta línea y fuera del nivel comunitario, la sociedad civil se ha constituido en una masa crítica que junto a empresas responsables han impulsado y adherido a principios voluntarios de derechos humanos y negocios¹², cumpliendo a una misma vez con el respeto y promoción de otros derechos sociales y económicos¹³.

Se ha relevado también que existe un interés en promover a las empresas locales mediante su vinculación a la industria extractiva como proveedores de bienes y servicios. De esta manera se fomenta el fortalecimiento de la economía local, con el impulso del sector extractivo, constituyéndose en un interés compartido con el gobierno¹⁴.



En una misma línea, el diagnóstico ha arrojado evidencia, que las industrias, gestionan el relacionamiento con las comunidades y asignan recursos humanos y técnicos¹⁵. Por otro lado, las empresas que se dedican a actividades de exploración en la primera fase del proyecto extractivo suelen no tener los recursos económicos para desarrollar procesos de colaboración y alianzas por requerir de una planificación e inversión de recursos humanos y financieros más importantes, por lo que las acciones de información y diálogos iniciales son decisivas. En otro orden, algunos proyectos en fase de explotación no cuentan con recursos humanos y financieros preasignados para un relacionamiento empresa-comunidad eficiente. Algunas empresas al no contar con una planificación para su relacionamiento pueden fallar en comunicar las oportunidades y los límites de su accionar¹⁶.

Durante la implementación del proyecto, el gobierno –nacional y local- y la empresa se encuentran en una situación de colaboración necesaria y tienen roles complementarios en el relacionamiento con la comunidad. No obstante, no siempre los roles respectivos están claros y no en todos los casos existen las capacidades necesarias para cumplir con dichos roles¹⁷.

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado que el relacionamiento en el sector extractivo se ha visto impulsado por avances importantes en el diseño y la implementación de principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el ICCM, las empresas han mejorado sus prácticas en aspectos como transparencia, derechos humanos y ambiente y buscan la forma de contribuir a un desarrollo sostenible a nivel país en los territorios donde operan¹⁸. Muchas empresas extractivas incluyen en su política de RSE programas de promoción de capacidades productivas, como también programas de salud, mejoramiento de infraestructura local y de educación formal¹⁹.

1.1.2. Gobierno

Los gobiernos nacionales de la región²⁰, sin distinción en cuanto a su orientación partidaria, han implementado políticas para la captación de inversiones extranjeras directas para proyectos que incluyen a las industrias extractivas²¹. Los altos precios de las materias primas han aumentado los ingresos fiscales de los países en América Latina y el Caribe y han incrementado la inversión y la actividad económica. Algunos gobiernos en la región ahorraron una porción de los ingresos y otros usaron dichas ganancias para incrementar el gasto fiscal. Es por eso que la reducción de los precios a finales de 2008 y con más fuerza entre 2012 y 2013 ha impactado de manera diferente en el desarrollo de los países²².

El auge de los precios de las materias primas ha tenido sus impactos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en la región²³. El sector extractivo también ha tenido efectos positivos en el empleo; no obstante, en comparación con el total de la Población Económicamente Activa (PEA) los aportes son relativamente modestos. En los países seleccionados para el diagnóstico, el porcentaje del empleo del sector extractivo frente a la PEA es de alrededor el 1% con excepción de Chile donde supera el 2%²⁴.

Los gobiernos buscan adaptar su marco institucional y legal para seguir captando ingresos a través del sector extractivo. La caída de los precios de los recursos mineros y petroleros a partir de 2013 ha llevado a los gobiernos nacionales a crear marcos normativos atractivos que aseguren la estabilidad económica y jurídica de las inversiones en el sector, lo que frecuentemente plantea dilemas para el equilibrio en su rol de regulador de las actividades extractivas y garante de los derechos humanos y recursos naturales²⁵.



Los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, han fortalecido sus sistemas democráticos e institucionales, han gestionado eficientemente la macroeconomía y han implementado políticas sociales incluyentes con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Aun así, el fin del boom de las materias primas ha develado problemas estructurales, en varios países de la región, referidos a asuntos fiscales e institucionales, así como a otros de tipo social, político y económico²⁶.

Los gobiernos nacionales crean el marco normativo e institucional bajo el cual se desarrolla el relacionamiento entre empresa y población local. Especial atención merece la consulta a Pueblos Indígenas considerada en marcos legales mediante la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo²⁷. Perú es el único país del estudio en el cual la consulta está reglamentada por una ley, mientras que en Chile, Colombia y México existen normas legales a nivel de decretos para este fin²⁸.

En otro orden y respecto al nivel de acceso a información también se encontró que está fuertemente regulado. En todos los países existen normas legales que facilitan el acceso a información de manera general, y en las leyes ambientales se especifica el acceso a informaciones sobre el estado de la naturaleza. La elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, incorporan en muchos casos derechos importantes para la población local como el acceso a información, a la consulta y otras formas de relacionamiento de actores²⁹.

Respecto al marco institucional del sector extractivo el gobierno nacional está conformado por diferentes ministerios que no necesariamente comparten las mismas prioridades, aunque su funcionamiento se rige por unos lineamientos generales de política pública. En todos los países del diagnóstico son los ministerios de minería y energía quienes diseñan las políticas para el sector extractivo y controlan el cumplimiento de los mismos³⁰. Por otra parte, existen los ministerios que velan por el ambiente y son los encargados de la aprobación de la licencia ambiental. Según cada país, intervienen otros ministerios en el relacionamiento con la población local. Por ejemplo, en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena coordina la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las comunidades indígenas³¹. En cambio, el Ministerio de Interior de Colombia lidera la interlocución con las comunidades locales. En Perú, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, aunque ha perdido su rol en los últimos años³².

Aparte del poder ejecutivo, en los países que fueron analizados en el diagnóstico existen otros actores estatales a nivel nacional que intervienen en el relacionamiento entre empresa, comunidad y Estado en el sector extractivo. La Defensoría de Pueblo actúa como garante de los Derechos Humanos y en algunos países como Perú también es un promotor importante de diálogos a nivel local. En México, es la empresa estatal PEMEX quien diseña las políticas de relacionamiento en el sector petrolero. La Corte Constitucional de Colombia, frente a la ausencia de una ley que regula la consulta previa,

ha contribuido a darle cuerpo a esta norma internacional³³. En resumen, intervienen una serie de actores nacionales estatales en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Si bien este accionar cubre posibles vacíos regulatorios, esto también aumenta el riesgo de una falta de coordinación entre las diferentes instancias por un lado y entre estas y otros actores como empresas y comunidades por el otro³⁴.

El diagnóstico también encontró que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos³⁵. Mientras que las competencias sobre el sector extractivo son centralizadas en el gobierno nacional, los gobiernos locales juegan un rol fundamental como representantes e interlocutores de la población local.

Las posibilidades de relacionamiento con los gobiernos locales dependen de sus perspectivas y políticas frente al sector extractivo. El diagnóstico muestra que, por ejemplo, en Argentina existen gobiernos provinciales con normativas favorables para el desarrollo del sector extractivo responsable mientras que otros siete gobiernos provinciales del mismo país han dictado leyes

que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos³⁶. En Colombia, hasta mediados de 2017 los Concejos Municipales de cinco municipios colombianos han aprobado consultas populares en torno a proyectos extractivos, y en todas las consultas la población ha votado en contra de estos proyectos³⁷.

Los gobiernos locales no solamente son interlocutores importantes en procesos de diálogo y colaboración, sino también juegan un rol central para que los recursos provenientes del sector extractivo sean invertidos de manera efectiva en obras que benefician a las comunidades aledañas al proyecto. Dependiendo del país, hasta 50% de los ingresos fiscales son distribuidos a los gobiernos locales, siendo Chile el país en el cual más se centralizan los ingresos y Colombia y Perú los países con mayor proporción de recursos descentralizados³⁸. Una condición importante para que los recursos aporten al



desarrollo local es la capacidad de los gobiernos subnacionales para coordinar la inversión y efectuarla de manera eficiente. Los recursos constituyen una oportunidad para el desarrollo y una transformación de las dinámicas y economías locales, siempre y cuando en los territorios estén las capacidades instaladas para poder aprovechar esta oportunidad³⁹.

El diagnóstico muestra que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las oportunidades para que los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local⁴⁰. Por ejemplo, en Argentina los tres sectores conformaron una la Agencia de Desarrollo a nivel local que contribuyó a que la economía local basada en la producción de lana, que atravesaba una fuerte crisis, se recuperara y generara alternativas productivas. La empresa minera que operaba en la zona impulsó la creación de la Agencia, participó activamente en ella, y financió algunos proyectos priorizados por la misma. Otro de los ejemplos es la Mesa de Buenos Vecinos que reúne a los tres actores en un municipio en Chile y orienta la inversión del sector extractivo hacia nuevas opciones económicas de desarrollo⁴¹.

Para los gobiernos locales, es de suma importancia que la inversión de los recursos se oriente a un plan de desarrollo del territorio y a un proceso de ordenamiento territorial, posibilitando de esta manera que los recursos sean destinados a las obras de mayor relevancia para los actores locales y respetando la planificación del gobierno local en lo que se refiere a sus posibilidades ambientales, económicas y sociales. Según esta perspectiva, el sector extractivo debería ser “un invitado en este proceso”⁴², que se suma y agrega valor a ese plan de desarrollo consensuado entre los grupos poblacionales y basado en la realidad del territorio.

En todos los niveles de gobierno, sobre todo en países con poca tradición extractiva, existe demanda para más capacitación y formación en temas relacionados con el sector. A nivel de los gobiernos locales se requiere la contratación de más técnicos especializados en estos temas. Un mayor conocimiento del sector extractivo facilitará una negociación más equitativa entre gobierno local y empresa extractiva y ayudará a consolidar y mejorar las prácticas de relacionamiento, lo que a su vez resultará en obtener más beneficios para la población local⁴³.





1.1.3. Sociedad Civil

La sociedad civil está conformada por una amplia gama de organizaciones y grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales y étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional o internacional. A nivel nacional, se encuentran fundaciones, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), academia, movimientos sociales, confederaciones de pueblos indígenas, iglesias, o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo, y sindicatos. A nivel local, actúan comunidades, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos indígenas y grupos afrodescendientes. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (agrupaciones no registradas oficialmente).

La heterogeneidad de la sociedad civil se refleja también en los diferentes roles que asumen sus organizaciones en el relacionamiento con los sectores privado y público en torno al sector extractivo. Los diagnósticos de todos los países seleccionados reportan una polarización de la sociedad entre opositores y partidarios en torno al sector extractivo. Pero también reportan una diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo que difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

La diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

Por un lado, en los países analizados existen OSC que crean y fortalecen espacios de relacionamiento entre empresas, Estado y las mismas comunidades y facilitan la comunicación entre los tres actores a nivel nacional y local. Por otro lado, existen OSC que desde una perspectiva crítica buscan incidir en las políticas públicas y generan información para contribuir a que las actividades extractivas cumplan con los derechos de las comunidades y estándares ambientales y sociales. En tercer lugar, se encuentra una serie de OSC que se oponen a la actividad extractiva incondicionalmente y fomentan y acompañan acciones de resistencia de la población local.

El diagnóstico relevó que, en Argentina, Chile y México, las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en

torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos. Generalmente, las universidades gozan de legitimidad ya que son consideradas como instancias con alto grado de saber técnico por ende guiados por este y percibidos en un rol neutral. Un ejemplo es el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (*Prodiálogo*) del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades con más prestigio en México que organiza foros y talleres multisectoriales para promover el diálogo en torno al sector extractivo⁴⁴.



Las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos.

Otros actores esenciales, son las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como actores con rol de decisión. Las empresas requieren la licencia social lo que implica un cierto grado de consentimiento de las comunidades para poder desarrollar su proyecto.

El presente diagnóstico recoge casos en los que las comunidades aledañas a proyectos extractivos los consideran como oportunidades de desarrollo y están dispuestas a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles. En estos procesos, las comunidades se han comprometido en un respeto a sus propias visiones de desarrollo y se relacionan con las empresas sobre la base del cumplimiento de esa visión. También, se comprometen con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

El diagnóstico muestra la evolución del relacionamiento respecto a la inversión de recursos en territorios ancestrales. Muchas de las buenas prácticas reportan el fortalecimiento de asambleas comunitarias y otros mecanismos de toma de decisión tradicionales mediante la presencia de la empresa en estos espacios para proporcionar la información y buscar el consentimiento de las organizaciones indígenas. En Colombia, el enfoque intercultural del relacionamiento de la empresa Cerrejón con un resguardo del pueblo Wayuú incluía el respeto a su cosmovisión, el uso del idioma Wayuú y la integración de autoridades indígenas tradicionales en la comisión de negociación. De esta manera, se respondió a las demandas de los pueblos indígenas por participación y autodeterminación, entendida como derecho a poseer, controlar, manejar y desarrollar el territorio⁴⁵.

1.2. Los costos de los conflictos

Un relacionamiento deficiente donde las quejas y las preocupaciones de la comunidad se acumulan sin resolución durante largos periodos de tiempo causa e intensifica conflictos que a su vez generan costos para la empresa, Estado y comunidades.

Un estudio que analiza los costos para las comunidades de seis proyectos de inversión de gran escala (dos de agroindustria, dos de energía, y dos de minería) encuentra los siguientes tipos de costos que generan los conflictos a nivel comunitario⁴⁶.

1. Financiamiento del movimiento opositor (honorarios de dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias contra el proyecto, redes sociales).
2. Financiamiento de asesorías legales que permitan judicializar los proyectos.
3. Financiamiento de estudios técnicos para contrastar informes de la empresa.
4. Financiamiento de traslados para las movilizaciones, reuniones informativas, visitas a autoridades políticas.
5. Depreciación de viviendas y actividades económicas por habitar próximos al proyecto y asumir impactos ambientales.
6. Fractura del tejido social, en tanto los conflictos generan efectos psicológicos y emocionales, desconfianza, competitividad y descalificaciones entre los propios habitantes.

Para el Estado, el mismo estudio indica los gastos relacionados con el encarecimiento del proceso de licenciamiento ambiental y con eventuales juicios y peritajes. Adicionalmente, el Estado tiene costos de personal para enfrentar los conflictos, para policía y militares y debe asumir también precios políticos. El país en general puede perder productividad e ingresos, competitividad e inversiones extranjeras⁴⁷.





El cálculo de los precios de los conflictos para las empresas resulta de la diferencia entre los gastos para la prevención y el abordaje de los conflictos (relacionados con la seguridad, contratación de personal especializado, capacitación del personal, entre otros) y los costos por los resultados del conflicto (modificaciones del proyecto, daños materiales, pérdida de productividad, reputación, entre otros)⁴⁸.

Mención aparte merecen los costos derivados de la mala reputación generada por un relacionamiento deficiente que dificulta la búsqueda de nuevo capital y los auspicios de inicio de una operación en un nuevo país⁴⁹.

Según una consulta realizada por el Fraser Institute, 36% de las empresas mineras encuestadas afirmó que la oposición pública a la minería ha afectado negativamente el proceso de autorización por parte del gobierno, resultando en demoras o rechazos de los permisos. La mayoría expresó que los argumentos de la oposición al sector extractivo fueron ambientales o de derechos de pueblos ancestrales⁵⁰. Por otro lado el BID, señala que de un total de 200 proyectos de infraestructura que se enfrentaron con algún tipo de conflicto, 36 fueron suspendidos debido a los conflictos, 162 enfrentaron retrasos y 116 sobrecostos⁵¹.

Según un estudio de la organización BDO International, la mayor preocupación para los ejecutivos internacionales mineros son los retrasos existentes y potenciales de los proyectos mineros. En una encuesta, ejecutivos financieros de alto nivel de Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Canadá expresaron sus inquietudes acerca del acceso a capital y créditos durante 2013, principalmente por las interrupciones observadas en diversos proyectos mineros⁵².

En 2008, un análisis de 190 proyectos de las empresas más importantes del sector petrolero arrojó como resultado que el tiempo hasta el inicio de la operación casi se había duplicado respecto de la década anterior. La razón fue el incremento de los costos. Un análisis más detallado mostró que los riesgos no técnicos constituían 50% del total de los riesgos y que entre este 50%, el riesgo más significativo fue el relacionamiento con otros actores sociales⁵³. Otro estudio de 19 empresas mineras de extracción de oro encontró que dos terceras partes de su valoración en el mercado fueron resultados de sus prácticas de relacionamiento con actores clave y solamente una tercera parte fue en función del valor del oro en el terreno⁵⁴.

De lo anterior se desprende la perspectiva de riesgos, donde los costos de los conflictos también señalan la necesidad de una planificación oportuna en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Este relacionamiento debe atender y equilibrar la diversidad de necesidades e intereses de todos los actores y así permitir un clima mejorado de inversión y el logro de beneficios comunes para todas las partes involucradas.

2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL



A continuación, se detallan los hallazgos de las buenas prácticas de relacionamiento identificadas y validadas en Argentina. El análisis de cada país se inicia con un cuadro resumen del contexto, buenas prácticas, mapeo de actores y marco legal. Posteriormente, se describen las buenas prácticas con más detalles, las partes involucradas y el marco legal en el cual se insertan dichas buenas prácticas. Al final del documento, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales.





2.1. ARGENTINA

Roberto Sarudiansky, Fundación EMPREM: rsarudi@gmail.com

María Gabriela Strazzolini, Fundación EMPREM: gstrazzolini@hotmail.com

2.1.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en 2016, el sector extractivo aportó el 3,8% al PIB⁵⁵. Los minerales metálicos más importantes fueron el oro y el cobre. El complejo oro y cobre en su conjunto contribuyó con el 4,6% a las exportaciones totales del país, mientras que el complejo petrolero y gasífero participó con el 3,3%⁵⁶. La mayor parte de la recaudación impositiva se realizó a través de impuestos nacionales (ganancias, créditos y débitos bancarios, valor agregado). Por el sistema de coparticipación federal, en 2017, la Nación retuvo el 37,89% del total de los impuestos nacionales coparticipables, el 3,75% de la Ciudad de Buenos Aires, el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias y los estados provinciales recibieron el 57,36% aproximadamente⁵⁷. Para 2016, el empleo de la industria extractiva alcanzó los 80.867 puestos de trabajo⁵⁸. Eso corresponde al 0,5% de la Población Económicamente Activa de Argentina en 2016⁵⁹.

Social: Argentina se caracteriza por contar con una sociedad civil organizada, cada vez más informada y con conciencia ambiental. Existe el movimiento “Vecinos auto convocados por el No a la mina”⁶⁰ que se opone a la actividad minera y cuenta con presencia territorial e incidencia en la opinión pública. La Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, conformada por diferentes sectores, es un espacio de referencia para llevar adelante discusiones sobre actividades extractivas⁶¹. El Atlas de Justicia Ambiental muestra 26 conflictos en Argentina de los cuales 23 corresponden al sector minero⁶².

Buenas prácticas



Vinculación con la comunidad, identificada en cuencas sociales, a través de la asociación de empresas (1994 – 2017, Información/Diálogo/Colaboración). Las empresas mineras en una misma zona de influencia coordinan la entrega de información a las comunidades y consensuan visiones y ejes de trabajo en los aspectos sociales con la mesa intersectorial como interlocutor en la cual confluyen los intereses de la sociedad civil y el gobierno local. El Estado provincial tiene un rol de coordinador y fiscalizador.

Firma de convenios de servidumbre en el sector minero (2012 – 2017, Diálogo/Colaboración/Alianza). En asambleas comunitarias, la empresa presentó información detallada y acordó convenios que han permitido la explotación del yacimiento, y prevén pagos por “servidumbre”, así como también capacitaciones, temas de infraestructura básica, salud y educación, entre otros. La empresa ha desarrollado protocolos para la comunicación e intercambios que han permitido un diálogo permanente, directo y fluido.

Conformación de Agencia de Desarrollo (2006 – 2017, Colaboración). La Agencia está conformada por representantes del sector público, privado y académico que como primer paso elaboraron el Plan Participativo de Desarrollo Sustentable a cuya ejecución aporta financieramente la empresa minera.

Mapa de Actores



Programa abierto de fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas en una localidad (2005 - 2017, Alianza). Articula con actores públicos, sociedad civil, incluyendo representantes de la academia, un proceso de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, sean proveedores de la compañía o no, para profesionalizar su gestión, certificar sus procesos y desarrollar sus productos y servicios, mediante capacitaciones, acceso a crédito y asesoramiento tecnológico-industrial, comercial y financiero.

El sector privado se encuentra constituido por empresas mayormente de capitales extranjeros agrupados en cámaras empresariales como también las empresas proveedoras de servicios y productos. Una excepción es Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de capitales públicos complementados con privados con una larga historia de “bandera argentina”.

Desde el sector público, puede visualizarse a nivel nación el Ministerio de Energía y Minería como responsable del diseño de la política nacional minera y energética y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable como responsable de velar por el ambiente. A nivel provincial, con impacto nacional también, se encuentran estas áreas representadas por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), el Consejo Federal de Energía (CFE) y el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

En el marco de las industrias extractivas, puede observarse un sector de la sociedad civil organizada integrado por OSC con diferentes posiciones frente a la actividad extractiva, así como organizaciones de tipo técnicas y la academia con un rol muy importante y presencia en todas las provincias con actividad extractiva. En muchos estados provinciales hay comunidades de pueblos originarios con distintos niveles de organización y reconocimiento, si bien aún no hay una agrupación que los represente a nivel nacional.

Marco Legal y Regulatorio



En cuanto a la normativa relativa al relacionamiento con la comunidad, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) referente a los derechos de los pueblos indígenas, fue aprobado y ratificado en 2000. La Ley General de Ambiente (25.675) sancionada en 2002 determina la responsabilidad de la información, prevé un sistema nacional integrado de información ambiental (art. 16 - 18) y establece el derecho a la consulta (art. 19-21). La Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) es una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. Fue sancionada en 2016 y rige desde septiembre 2017. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha anunciado la incorporación de la iniciativa “Hacia una minería sustentable” (TSM por sus siglas en inglés).



2.1.2. Introducción

El carácter federal de la Argentina establecido en la Constitución de 1994 determina que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Ante esta realidad es determinante la relación entre los estados provinciales y el estado nacional para que pueda existir una política nacional de la industria minera e hidrocarburífera. En la actualidad la relación Nación – Provincia al igual que los niveles de involucramiento entre sociedad, estado y empresa en cada una de las provincias se da de forma muy dispar desde la perspectiva institucional e inclusive regulatoria. Esta disparidad llega incluso al hecho de que convivan provincias que tienen legislaciones que permiten la minería a cielo abierto con otras provincias que la prohíben.

Asimismo, el sector público a nivel de gobierno provincial y municipal muestra problemáticas que se presentan también en distinto grado dependiendo de la jurisdicción en las áreas de capacidad institucional, planificación a corto, mediano y largo plazo, transparencia en la información sobre la gestión pública de los recursos, disponibilidad de recursos económicos y humanos, capacidades instaladas del personal, credibilidad en su rol de contralor, participación en el triángulo empresa – sociedad – estado⁶³.

En Argentina, desde principio de los años 2000 se han generado conflictos socioambientales vinculados principalmente con las actividades de prospección y exploración minera metalífera, en especial por el uso del agua y su posible contaminación. En relación con estos conflictos, siete provincias (Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego⁶⁴) han dictado leyes que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos. Existen por lo menos dos proyectos mineros en exploración que no han podido avanzar hacia su puesta en marcha por la oposición de organizaciones locales a la minería a cielo abierto con uso de sustancias peligrosas:

Famatina en la provincia de La Rioja y Esquel en la provincia de Chubut, conflicto que terminó en la sanción de una ley provincial que prohíbe este tipo de minería⁶⁵. En el ámbito del petróleo y el gas, han surgido en los últimos años movimientos opositores a la utilización del *fracking* en las operaciones de extracción. Esto se observa principalmente en la provincia de Neuquén, en el yacimiento de Vaca Muerta⁶⁶.

Durante la investigación de campo para el diagnóstico, se constató una sociedad civil dividida detrás de dos posiciones en cuanto a las industrias extractivas. Un segmento de la sociedad que está conformado mayoritariamente por organizaciones ambientalistas y habitantes de las poblaciones cercanas que perciben que los proyectos extractivos no mejoran su situación de vida y que reciben las consecuencias de una fuerte inmigración con el consiguiente colapso de la infraestructura, la aparición de nuevas problemáticas sociales además del temor a los impactos ambientales negativos que la actividad pueda generar; y otro segmento, que pone énfasis en la industria extractiva como generadora o motor de crecimiento con un fuerte efecto multiplicador de la economía en zonas con bajas o nulas posibilidades de desarrollar alternativas productivas.

2.1.3. Buenas prácticas

En Argentina pueden encontrarse diferentes experiencias de relacionamiento entre gobierno, del sector productivo de las industrias extractivas y las comunidades. Estas se desarrollan, mayormente, en un ámbito local, es decir, en localidades que se encuentran impactadas por los emprendimientos mineros o de hidrocarburos. Sin embargo, existen algunos ejemplos donde su aplicación fue nacional como el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con su programa de educación energética en el nivel de información.

Entre los actores involucrados se presentan las empresas, el gobierno a través de sus diferentes organismos o instituciones provinciales y municipales y la sociedad civil, incluyendo poblaciones urbanas y rurales, así como minorías (pueblos originarios como los kollas, los huarpes, los mapuches) o grupos en situación de vulnerabilidad (como por ejemplo los jóvenes en situación de riesgo).

Las acciones abarcan todos los niveles de relacionamiento considerados en este estudio (información, diálogo, colaboración y alianza) a excepción de la consulta pública. No se han dado aún casos de consultas públicas ni dentro ni fuera del marco de la normativa de la OIT en proyectos de minería metalífera como parte del proceso de vinculación del sector privado con la comunidad. Sí se han llevado a cabo otro tipo de instancias de consulta como las audiencias públicas. En los niveles de información, las empresas suelen ser el principal impulsor de las acciones y actividades, mientras que, en los casos de diálogo y colaboración, el sector privado trabaja de forma conjunta con el resto de los actores, y en el caso de las alianzas se convierte en la fuente de financiamiento de proyectos llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil principalmente.

En Argentina, se han identificado y validado las siguientes buenas prácticas⁶⁷:

2.1.3.1. Cuencas Sociales como área de intervención

2.1.3.2. Firma de Acuerdos de Servidumbre

2.1.3.3. Conformación Agencia de Desarrollo

2.1.3.4. Programa Pymes

2.1.3.1. Cuencas Sociales como área de intervención

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Información



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

1994 – 2017⁶⁸



ACTORES PRINCIPALES

Mansfield Argentina, Cámara de Minería de Salta. Secretaría de Minas de la provincia de Salta, Municipalidad de Tolar Grande. Comunidad Kolla.



DESCRIPCIÓN

Hallazgo de oro: en 2000, la empresa Mansfield Argentina descubrió oro en el proyecto Lindero, próximo a la localidad Tolar Grande. Actualmente, el proyecto está en fase de construcción.

Alianzas con las estructuras mineras locales: la empresa Mansfield se insertó en la dinámica de la Cámara de Minería de Salta que, a la vez, desarrolló un proceso coordinado entre sus asociados bajo la identificación de “Cuencas Sociales” reuniendo localidades que fueran impactadas por varias empresas mineras de forma simultánea (aún en diferentes etapas del proceso).

La Cámara de Minería agrupa diferentes empresas para articular el trabajo y el relacionamiento con la comunidad. Las empresas se reúnen y definen consensuadamente los pasos y acciones a seguir y cada una determina cuál será su aporte (generalmente en relación al estado y dimensión de su proyecto o emprendimiento).

Mansfield Argentina comparte la “Cuenca Social” con Corriente Argentina S.A. (cobre, etapa de estudio económico), Litio Minera Argentina (litio, etapa de estudio económico), Regulus Resources (cobre, etapa de estudio económico), Posco (litio), entre otros. Mansfield es la única empresa que en este momento se encuentra iniciando la etapa de construcción para la posterior explotación.

Coordinación: las empresas coordinan la entrega de la información mediante charlas. Estas charlas son siempre fiscalizadas por el gobierno provincial quien redacta un acta en la que incluye necesidades, preocupaciones e intereses de la comunidad y los compromisos asumidos por las empresas.

Fiscalización: la Secretaría de Minería de la Provincia cumple un rol de coordinador y fiscalizador de las “Cuencas Sociales”. Es quien convoca a las empresas y a la comunidad y redacta el acta y luego la circula entre las partes involucradas.



Mesa Multisectorial: asimismo, como parte del proceso, en Tolar Grande, se ha constituido una mesa multisectorial (comunidades, intendencia, policía, escuela, iglesia, entre otros) que recibe y solicita información sobre cuestiones que preocupan o interesan a la comunidad. Esta mesa representa a la parte interesada por la comunidad y es quien asiste a las convocatorias.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Anteriormente, la presencia de varias empresas en la provincia de Salta contribuyó a la difusión de información confusa, contradictoria y deficiente a las comunidades y al desarrollo de acciones individuales. Con la introducción del concepto de Cuencas Sociales, las comunidades cuentan con un espacio para plantear sus inquietudes y obtener una respuesta única y consensuada desde el sector empresarial en un proceso fiscalizado por el Estado. En su primera fase, se focaliza mayormente en el intercambio de información sobre los proyectos.⁶⁹



INNOVACIÓN⁷⁰

En un sector altamente competitivo, generalmente las empresas trabajan de manera individual. En esta Buena práctica, se cambió esta forma de trabajo. Lo innovador es el "trabajo en equipo" de las empresas entre sí y con las comunidades y el Estado provincial y municipal de forma tal que los mecanismos de información (demanda y oferta) se dan de forma fluida y enriquecedora desde todos los sectores involucrados, evitando especulaciones y oportunismos.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD⁷¹

- Participación institucionalizada: La práctica integra mecanismos unilaterales y bilaterales para informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas por la empresa con la mesa multisectorial.
- Pertinencia metodológica: La agrupación de empresas resultó altamente positivo fijando prioridades y dando continuidad a las políticas implementadas (información oportuna y de calidad).
- Sostenibilidad institucional: El proceso de relacionamiento se desarrolla a través de canales de comunicación institucionalizados. La Secretaría de Minería de la Provincia cuenta con personal destinado a la temática de relacionamiento con la comunidad.



ENFOQUES⁷²

Enfoque de diversidad: la empresa se vincula desde una perspectiva de interculturalidad con comunidades indígenas y campesinas próximas al proyecto.

Enfoque de transformación de conflictos: quienes lideran el proyecto poseen una visión del conflicto como una instancia natural en las relaciones humanas y como motor de cambio.



LECCIONES APRENDIDAS

El trabajo consensuado entre pares se enriquece a través del aporte de experiencias y conocimiento de todos. La licencia social, entendida como la aprobación por parte de la comunidad de las actividades desarrolladas por la empresa, implica un trabajo constante con la sociedad civil porque siempre pueden surgir nuevas dudas o inquietudes. Es así como dentro de la Cámara de la provincia de Salta cada empresa realiza su aporte tanto en recursos económicos como en conocimientos y experticia de acuerdo a sus capacidades para llevar adelante su relacionamiento con la comunidad.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de una visita de campo en la cual se mantuvieron entrevistas con representantes del gobierno municipal, el concejo deliberante (poder legislativo), la escuela y la comunidad kolla. También, se mantuvieron varias entrevistas con el CEO de la compañía.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.cmsalta.com.ar/>
www.cmsalta.com.ar

Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration – an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario



2.1.3.2. Firma de acuerdos de servidumbre

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2012 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Minera Exar. Comunidades originarias del grupo de Atacama.



DESCRIPCIÓN

Extracción de litio y pueblos originarios: el proyecto Cauchari-Olaroz para la explotación de litio está situado en tierras de pueblos originarios que pertenecen a las comunidades de Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Olaroz Chico y Susques, ubicados en el Departamento de Susques, Provincia de Jujuy.

Permiso de uso de tierras: estas comunidades en particular tienen que otorgar de forma explícita el permiso para el desarrollo de la actividad en sus tierras ya que son las dueñas de las mismas. Sin el mismo, quedaría la instancia judicial para resolver el conflicto.

Primer acercamiento: en 2008, Minera Exar inició sus actividades exploratorias y tomó contacto con los pobladores cercanos al yacimiento. En este contexto, participó de dos asambleas comunitarias en las que explicó el proyecto y solicitó la firma de un acuerdo para iniciar la exploración.

Presentación de informes: su participación en estas asambleas fue incrementándose de forma paulatina a medida que se avanzaba en el proyecto. Se presentaron más de tres informes de impacto ambiental, más un informe de línea de base antes de presentar el Informe de Impacto Ambiental de Explotación.

Firma de convenios: en 2011 y 2012, luego de varios intercambios de ideas, posiciones e intereses, la empresa y las comunidades indígenas llegaron a acuerdos que se tradujeron en la firma de convenios que permitían:

- La explotación del yacimiento, lo que se tradujo en pagos por “servidumbre”.
- Incluían como aporte adicional capacitaciones, temas de infraestructura básica, salud y educación, soporte a instituciones municipales, deportivas, religiosas, es decir, una suerte de “plan de desarrollo” concertados con la comunidad con base en las necesidades que ella misma expresó.
- Las comunidades de forma individual tenían a un abogado (elegido por ellos) y pagado por la empresa Exar. Los acuerdos se certificaron frente a escribano público y se adjuntaron a las actuaciones legales en minería, caso inédito ya que no es obligatorio hacerlo

Nuevos compromisos: se llevaron a cabo estas acciones y se renovaron los convenios con nuevos compromisos. Los acuerdos de servidumbre se actualizan cada 5 años. La



firma de seis acuerdos respondió a que estaban involucradas seis comunidades del Pueblo de Atacama en el área de influencia del proyecto. Se trató de un proceso donde las comunidades recibieron asesoramiento de profesionales independientes.

Protocolos para la comunicación e intercambios:

“se institucionalizaron las vías de comunicación entre empresa y comunidad a través de patrones y procesos que generaron previsibilidad. La empresa participa mensualmente de la asamblea comunitaria y cuando es convocada por un tema puntual”⁷³.

Institucionalización del relacionamiento:

la empresa cuenta desde su inicio con un área de relaciones comunitarias con contacto permanente con la comunidad y la responsabilidad de ejecutar programas para atender necesidades de la misma: empleo, capacitación y ayuda económica para fiestas, reparaciones de edificios comunitarios, escuelas, entre otras.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

El resultado es el alcance y firma de acuerdos que, por un lado, permitieron a la empresa llevar adelante sus actividades con la aprobación de la comunidad y, por el otro, la comunidad obtuvo beneficios a través de la implementación de los programas mencionados más arriba para su desarrollo local a partir de un proceso participativo.



INNOVACIÓN

El caso de Exar fue novedoso y conocido en Argentina porque involucró a una compañía que trabajó con la comunidad desde el inicio de la etapa de exploración en una vinculación con comunidades indígenas que fue más allá de un intercambio de información buscando un compromiso con el desarrollo de la misma, a través de acuerdos alcanzados por medio del diálogo y consenso, supliendo voluntariamente de alguna forma a la consulta que no está reglamentada en Argentina.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: existen espacios de diálogo de los portadores de interés en los que éstos plantean sus necesidades o inquietudes. Estos espacios se dan en las asambleas comunitarias mensuales en las que está presente la empresa⁷⁴.
- Pertinencia metodológica: la comunidad participa activamente en el diseño e implementación de los “planes de desarrollo” que son de su interés.
- Sostenibilidad institucional: se alcanzan acuerdos formales como consecuencia de los procesos de diálogo que se traducen en el marco de los acuerdos de servidumbre que se renuevan cada 5 años.



ENFOQUES

Enfoque de diversidad: esta práctica exigió a la empresa tener un enfoque intercultural ya que la práctica involucra población perteneciente a los pueblos originarios.

Enfoque de transformación de conflictos: los protagonistas en la negociación de los acuerdos tuvieron una mirada del conflicto como natural y constructivo al avanzar en el acercamiento de posiciones.



LECCIONES APRENDIDAS

La práctica ha contribuido a construir ciertas afirmaciones:

- Flexibilidad para recibir aportes y moldear propuestas en el intercambio con otros actores.
- Selección y entrenamiento del personal de la empresa que liderará los intercambios con las comunidades.
- Planificación de la política de vinculación con la comunidad y el plan de responsabilidad empresarial desde el inicio del proyecto.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de entrevistas a profesionales independientes que participaron en la negociación de los acuerdos, así como representantes de la comunidad indígena del Grupo de Atacama y el área de responsabilidad social de la empresa. La buena práctica fue mencionada en la Mesa de Trabajo Multisectorial, realizada el 28 de junio del 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration – an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario.

<https://www.mineraexar.com.ar/comunidades>

2.1.3.3. Conformación de Agencia de Desarrollo

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



DURACIÓN

2006 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Cerro Vanguardia S.A., Cámara de Comercio. Representantes del gobierno provincial de la Provincia de Santa Cruz, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Puerto San Julián (con representantes de la mayoría y minoría parlamentaria). Sociedad Rural de Puerto San Julián y de la Universidad de la Patagonia Austral.



DESCRIPCIÓN

Extracción de oro y plata: en 1997 comenzó la etapa de construcción del Proyecto Cerro Vanguardia (oro y plata), en la Provincia de Santa Cruz. La localidad de influencia primaria, es decir, el territorio donde se manifestarán los impactos por su proximidad al proyecto es Puerto San Julián que se ubica a unos 150 km del yacimiento.

Contexto: la principal actividad productiva de la localidad y sus alrededores se basaba en la cría de ganado ovino que atravesaba por un proceso de desertificación del campo, así como una baja en los precios internacionales de la lana. A esta realidad se sumó la erupción del volcán Hudson, en 1991, que cubrió de cenizas toda la meseta central de la provincia. En esta coyuntura se comenzó a desarrollar la actividad minera que siguió una etapa de crecimiento que continúa hasta hoy.

Creación de la Agencia de Desarrollo: en 2004, Cerro Vanguardia propuso la creación, gestión y puesta en marcha de una Agencia de Desarrollo para potenciar las fuentes de desarrollo socio-económico de la comunidad de Puerto San Julián. La Agencia está compuesta por representantes de los tres sectores (gobierno en distintos niveles, provincial y municipal, empresa y sociedad civil), lo cual le otorga legitimidad.

Acta de Acuerdo: en 2004, se firmó un Acta de Acuerdo para la creación de la Agencia de Desarrollo con un consejo directivo integrado por sector público, sector privado y sociedad civil para lo cual la empresa aporta recursos técnicos y profesionales.

Primeros consensos: entre 2004 y 2006, se dio una etapa de construcción de consensos y se atravesó un período de discusiones y acuerdos para la conformación de la Agencia, consensuando misión y visión de la misma, así como su constitución legal y su proceso administrativo.

Plan de Desarrollo: el objetivo específico inmediato de la Agencia fue la elaboración del Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de Puerto San Julián. Los foros y talleres sectoriales comenzaron en diciembre de 2006 y el Plan fue presentado a las autoridades y a la sociedad civil en junio de 2008, comprendiendo una amplia diversidad de áreas con una proyección 2007- 2020.

Ejecución de proyectos:

En 2010 se firmó un acuerdo marco entre la Agencia de Desarrollo, el Municipio y la empresa Cerro Vanguardia con el fin de conformar una estructura de apoyo local que permitiera la ejecución de los proyectos de la Agencia a través de un aporte monetario de la empresa, actualizado anualmente en base a las utilidades de la empresa

Validación de la práctica:

luego de varios años de funcionamiento de la Agencia de Desarrollo se ha logrado incrementar el capital social de la comunidad. Al momento de validar la práctica con representantes del sector público (Concejo Deliberante) y de la sociedad civil (Universidad de la Patagonia Austral) además

de quienes lideraron la práctica desde la empresa, se realizaron observaciones de algunos puntos a mejorar: las tasas de devolución de créditos productivos; agilidad en los procesos administrativo internos; niveles de aporte de los proyectos presentados al Plan Participativo; diversificación entre proyectos productivos y otros que se vinculan con otras facetas del desarrollo sustentable de una comunidad.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Mejoras y equipamiento para el aeropuerto local que permitirán la recepción de vuelos comerciales, el saneamiento del basural municipal junto al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y aportes a proyectos productivos aprobados por la Agencia entre otros se desarrollaron en 2017. También se realizaron aportes al patrimonio cultural del lugar. Antes de la llegada de la empresa, la economía local basada en la producción de lana estaba atravesando una crisis. Con la llegada de la minería, la región no solamente contaba con nuevas inversiones, sino también se creó un espacio participativo donde están representados los actores principales de la sociedad civil, el Estado y la empresa con la finalidad de buscar acciones, proyectos y alternativas para un desarrollo sustentable de la localidad.



INNOVACIÓN

La utilización de una herramienta como la “agencia”, una institución sin fines de lucro, que planifica y toma decisiones de manera multisectorial y concertada, con gestión del municipio y recursos de la empresa es un aspecto innovador. La Agencia marca una diferencia en cuanto a que fija prioridades de forma estratégica para el desarrollo de la localidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: Se conformó un espacio multi-actor con la participación de representantes de distintos sectores (sector público, sector privado, sociedad civil) para colaborar en el análisis de las mejores propuestas para un desarrollo de la localidad de Puerto San Julián.
- Pertinencia según demanda: Con la creación de la Agencia, las partes involucradas cuentan con un plan de desarrollo sustentable a largo plazo para la localidad.
- Sostenibilidad por consenso: dada la participación de representantes de diversos ámbitos de la comunidad



ENFOQUES

Enfoque de desarrollo sostenible: esta práctica concibe el desarrollo como un modelo integral e integrador, que articula de manera equilibrada las dimensiones de la realidad (económica, social, cultural, ambiental).

Enfoque de transformación de conflictos: la creación de una herramienta como la Agencia implica una visión del conflicto como motor de transformación.

Enfoque de diversidad: esta práctica involucra a comunidades urbanas y rurales.



LECCIONES APRENDIDAS

La búsqueda de acuerdos conlleva un esfuerzo en el diálogo y la búsqueda de consensos que es compensada a través de la legitimidad de las acciones que surjan de la misma. En este tipo de organizaciones colaborativas la transparencia es fundamental para mantener su credibilidad.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de entrevistas a representantes del sector público y académico que integran la Agencia como también de la empresa. La buena práctica fue mencionada en la Mesa de Trabajo Multisectorial, realizada el 28 de junio del 2017.



BIBLIOGRAFÍA /LINKS

<https://www.sanjulian.gob.ar/?q=fundacion-agencia-desarrollo>

<http://www.observadorcentral.com.ar/especializadas/desarrollo-local/puerto-san-julian-la-ciudad-que-penso-y-actuo-su-desarrollo/>

2.1.3.4. Programa Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

2005 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Pan American Energy (PAE), Cámara de Industria, Comercio y Producción de Comodoro Rivadavia, Cámara Industrial de Puerto Madryn Región Patagonia, consultoras del ámbito privado.

Ente Autárquico Comodoro Conocimiento (dependiente del Municipalidad de Comodoro Rivadavia)

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Chubut, Universidad de la Patagonia Austral en Santa Cruz, institutos y asociaciones como Asociaciones de Mutuales Israelitas Argentinas, Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Fundación Contribuir al Desarrollo Local.



DESCRIPCIÓN

La empresa: en 1997, nace Pan American Energy fruto de la fusión entre Bidas y Amoco Corp (hoy BP). Es una de las principales productoras de petróleo y gas de Argentina. Esta compañía opera en cuatro de las principales cuencas del país: Golfo de San Jorge, Noroeste, Neuquina y Marina Austral.

Relevamiento de información: en 2005, PAE detectó que en la región del Golfo San Jorge existía un contexto socioeconómico regional con posibilidades de fortalecer el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) locales frente a la presencia de competidores internacionales con estándares sumamente competitivos. Así surgió el Programa PYMES para promover el desarrollo regional a través del apoyo a las empresas locales y con el distintivo de ser abierto a todas las empresas, sean o no proveedoras de PAE, y pertenezcan o no a la industria hidrocarbúfera.

Apoyo del programa: el programa ayuda a profesionalizar la gestión de PYMES, a certificar sus procesos y a desarrollar sus productos y servicios, mediante capacitaciones y asesoramiento tecnológico-industrial, comercial y financiero. Como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), PAE ha dirigido sus esfuerzos para contribuir a elevar el nivel de profesionalismo y de competitividad de las empresas y emprendedores, así como apoyarlas en el acceso al crédito. También estimula nuevos desarrollos acompañando a las empresas desde la idea proyecto hasta el plan de negocios.

Espacios: para llevar a cabo las actividades del programa se utilizaron las instalaciones de Comodoro Conocimiento (Agencia de Desarrollo de Comodoro Rivadavia) y otros espacios ofrecidos por las instituciones con las que el Programa PYMES de PAE interactúa en la región.

Ampliación geográfica: en 2005, el Programa inició y centralizó sus actividades en localidades de la región del Golfo San Jorge (GSJ) comprendida por el sur de Chubut (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento) y el norte de Santa Cruz (Pico Truncado y Caleta Olivia). Hacia fines de 2013, el Programa comenzó a desarrollar sus actividades también en las provincias de Neuquén y Salta (en la localidad de Tartagal), acompañando a empresas y emprendedores de estas regiones. Así, el programa se expande a todas las áreas operadas por PAE y se vuelve replicable de acuerdo a la realidad y las necesidades de las comunidades locales.

Beneficiarios: esta buena práctica tuvo por destinatario a la población urbana y rural. Surgió de las necesidades de la empresa y la potencialidad de la comunidad.

Articulación: la comunicación con el sector PYMES mejoró ya que la comunidad percibió que la empresa estaba cercana a ella y que esto sería por período de mediano a largo plazo. PAE se considera articulador de una alianza entre las PYMES y el Estado en todos sus niveles y quienes tienen el saber técnico para el desarrollo de las actividades.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

A través del programa, la empresa creó un espacio donde interactúan empresas de diferentes tamaños, profesionales y técnicos, sector público a través de la agencia de desarrollo y academia.

Se desarrollaron acciones para contribuir al desarrollo de proyectos y alternativas productivas en la búsqueda de un crecimiento económico de la comunidad. Se observaron los siguientes impactos/alcances: a) 33% de las PYMES del programa aumentaron su facturación en los últimos dos años, b) se realizaron 262 capacitaciones abiertas en gestión administrativa, financiera y comercial, comunicación, liderazgo e informática, entre otras, c) en 2016, se realizaron 34 asistencias *in Company*, d) 70% de las empresas que participaron de las actividades son proveedores de PAE, e) 23 proyectos vinculados con innovación, mejora y sustitución de productos se presentaron en 2016, y f) más de 3.400 PYMES y emprendedores participaron de las propuestas del programa desde su inicio⁷⁵.



INNOVACIÓN

El programa busca el desarrollo de la región donde opera la empresa a través del apoyo al crecimiento de PYMES. Lo innovador es que la empresa apoya tanto a proveedoras como a no proveedoras de la compañía y que pueden ser del área hidrocarburífera así como de cualquier otro tipo de actividad económica. Se incentiva el emprendimiento a través de concursos y premios para generar nuevos negocios. La empresa juega un rol de articulador entre los diferentes actores antes mencionados para implementar este programa, a la vez que lo financia.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: Las PYMES solicitan la participación en las capacitaciones *in company* y abiertas y los asesoramientos que ofrece PAE
- Pertinencia según demanda: Esta práctica aborda un problema concreto (escasez de proveedores competitivos) y las soluciones están planteadas por los actores locales.
- Sostenibilidad por consenso: La empresa ha financiado este programa a través de sus alianzas con entidades públicas y privadas, así como profesionales independientes durante 11 años.



ENFOQUES

Enfoque de Desarrollo Sostenible: Esta práctica muestra un enfoque de desarrollo sostenible dado que apunta a la creación y expansión de un entramado productivo diversificado.



LECCIONES APRENDIDAS

Es fundamental el rol de los tres actores para avanzar en objetivos comunes a través de la vinculación entre Estado, OSC (incluidas universidades) y la empresa.

La participación de una comunidad con una actitud emprendedora permitió los buenos resultados de este tipo de programa. El rol de la empresa creando puentes con los demás sectores también ha sido fundamental para el éxito del programa



VALIDACIÓN

La práctica fue validada en una visita de campo a través de entrevistas a empresas y emprendedores que participan del Programa, así como a los representantes de las instituciones con las que conforma alianzas, como la Agencia de Desarrollo Comodoro Conocimiento y profesionales y técnicos. También, se entrevistó a representantes de Pan American Energy.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://www.pan-energy.com/comunidad/Paginas/programa-pymes-pae.aspx>
http://www.diariojornada.com.ar/176279/sociedad/comodoro_el_programa_pymes_de_pae_ratifico_su_compromiso_con_empresarios_y_emprendedores/
<http://www.conocimiento.gov.ar>

2.1.4. Análisis de actores

Los actores clave en el relacionamiento en torno al sector extractivo en Argentina son los siguientes.

Empresas

Las empresas mineras y del petróleo y gas buscan lograr acuerdos con los gobiernos y las comunidades que les permitan el desarrollo de los proyectos a cambio de los aportes tributarios y los aportes que realicen al desarrollo comunitario a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Su necesidad es obtener la licencia social y legal para desarrollar el negocio. Se vinculan con la sociedad civil, academia y gobierno y con sus casas matrices para la definición de la estrategia de relacionamiento con la comunidad. Generalmente, son empresas que cuentan con recursos humanos y materiales.

Por sus políticas corporativas, se adhieren a diversos protocolos e iniciativas internacionales para mejorar sus prácticas en distintas áreas (social, ambiental, laboral). Por ejemplo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) anunció la incorporación de la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable” (TSM por sus siglas en inglés), para mejorar las prácticas sociales y ambientales de la industria minera. Esta es la segunda ocasión en la que el programa TSM es adoptado por una asociación minera fuera de Canadá y la primera vez en Latinoamérica. La Asociación Minera de Canadá (MAC) comparte el programa con otros países que buscan herramientas para mejorar la *performance* ambiental y social de sus industrias mineras incluyendo compromisos con la sociedad civil y mejoras en la transparencia y la rendición de cuentas⁷⁶.

A la vez, algunas empresas han sufrido un importante desprestigio y descreimiento en la opinión pública general, en particular, aquellas que han tenido incidentes ambientales. Por otra parte, el tema minero se ha transformado en un tema de la agenda política de los gobernadores en sus campañas, ubicándose los mismos en favor o en contra de la actividad⁷⁷.

En el caso del petróleo, con muchos más años de actividad en Argentina y siendo Yacimientos Petrolíferos Fiscales la principal empresa hidrocarburífera de capitales estatales, se registran niveles de conflictividad más bajos. Sin embargo, la extracción por *fracking* generó un incremento de la misma.

Gobierno

Las Secretarías o Direcciones de Minería y Energía de las provincias son autoridad de aplicación del Código de Minería y de las leyes provinciales de minería y energía como consecuencia de la federalización de los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo provincial. Su posición es la de promocionar y controlar el desarrollo de las actividades extractivas en sus jurisdicciones cumpliendo con la legislación nacional y provincial. Sus intereses son el cumplimiento de los requerimientos a las empresas (p.e. presentación de estudio de impacto ambiental) y de contralor. Su necesidad es aportar al desarrollo productivo provincial y mantener bajos los niveles de conflictividad social que la actividad extractiva pudiera generar dentro de la dinámica social.

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación promueve una actividad extractiva responsable que genere un desarrollo sustentable cumpliendo con las normativas nacionales vigentes y protocolos internacionales. Sus intereses se traducen en la fijación

de políticas públicas a nivel nacional que sean aceptadas y aplicadas por los estados provinciales, dueños de los recursos naturales. Las necesidades se basan en lograr una coherencia y uniformidad en la política minera y energética en el marco del federalismo que permita atraer inversiones para el desarrollo de la industria. Tiene presencia territorial a través del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y el Consejo Federal de Energía (CFE).

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es la institución que vela por el cuidado del medio ambiente a nivel nacional. El Ministerio pone sus esfuerzos en que las leyes sean cumplidas y plantea exigencias y sanciones a aquellos que puedan afectar el medio ambiente. Como el Ministerio de Energía y Minería tiene presencia territorial a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Sociedad Civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden clasificarse de acuerdo a su forma de tratar el tema de las industrias extractivas.

OSC generadoras de espacios multi-actor

Estas organizaciones se caracterizan por mantener una posición dialoguista frente a las actividades extractivas ya que su objetivo es generar espacios de diálogo, buscando vincular al Estado, la sociedad civil y las empresas. Su interés está en lograr cierto acercamiento entre las partes, enriqueciendo el debate y buscando acuerdos para transformar el conflicto en una solución superadora que integre los intereses de los diversos actores.

PLATAFORMA ARGENTINA DE DIÁLOGO

Un ejemplo de cómo algunas organizaciones no gubernamentales promueven el diálogo es la Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales. La Plataforma es un espacio de referencia para adelantar discusiones sobre actividades extractivas integrado por organizaciones de la Sociedad Civil y universidades. La Fundación Cambio Democrático fue la promotora de la creación de la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable (hoy Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales). Actualmente la conforman Fundación Cambio Democrático, Fundación Directorio Legislativo, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Universidad Católica Argentina. La Plataforma goza de legitimidad y posee capacidad de tender redes de forma horizontal y puentes con el sector gobierno y el sector privado. No obstante, falta su presencia en el territorio federal.

Estas organizaciones se relacionan con otras OSC nacionales e internacionales, con la academia, el Gobierno, embajadas de otros países, organismos internacionales y el sector privado.

Sus principales fortalezas son conocimiento y experticia en mediación y resolución de conflictos; experiencia en mapeo de actores y conflictos; capacidad para tejer redes de forma horizontal con la sociedad civil y construir puentes con los otros sectores; capacidad propositiva a través de soluciones a las verdaderas necesidades de los actores. Algunas de las debilidades son su falta de presencia en el territorio federal y recursos materiales insuficientes.

OSC críticas con respecto a las actividades extractivas

Principalmente, son ONG ambientalistas con una posición crítica de las actividades extractivas en general⁷⁸. Su interés se centra en un control estricto de estas actividades y restricción de las mismas a ciertas partes del territorio o a ciertas formas de explotación de los yacimientos o cierto procesamiento del mineral.

Sus fortalezas son, en la mayoría de los casos, contar con recursos humanos y materiales, tener influencia en la opinión pública y gozar de legitimidad. Su principal debilidad es la baja capacidad de construir puentes con otros sectores.

OSC opositoras a las actividades extractiva

Son ONG con una posición clara de oposición a la actividad minera. Su interés es parar las actividades extractivas, sobre todo mineras, que consideran que pueden generar desastres ambientales⁷⁹. No buscan acercar posiciones ni dialogar y representan una posición más intransigente y de confrontación.

Cuentan con recursos humanos y materiales, tienen influencia en la opinión pública, gozan de legitimidad, tienen llegada en los medios de comunicación, y tienen presencia territorial. Se considera una debilidad su falta de capacidades para el diálogo y soluciones consensuadas.

El sector académico

En este sector, hay que destacar el trabajo de las universidades nacionales que tienen áreas de formación académica, investigación y transferencia relacionadas con las actividades extractivas. Aunque las universidades plantean diversas posiciones con respecto a dichas actividades, se interesan por difundir el conocimiento técnico y académico sobre estas industrias para un mejor entendimiento de la sociedad. Tienen la necesidad de que se comprenda cómo opera la actividad extractiva y lo esencial de su existencia para la vida cotidiana. Algunas promueven la formación de profesionales en estas áreas y contribuyen a disminuir los grados de conflictividad social para que la industria prospere y los profesionales gocen de oportunidades laborales en Argentina. Las universidades tienen un rol fundamental dentro del entramado social en Argentina.

Uno de los centros académicos más activo es la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)⁸⁰. La UNSAM promovió una alianza con otras universidades públicas sumando algunas casas de altos estudios privadas para formar una red de profesionales que constituyen la “Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable” que ofrece asesorías y asistencia a los responsables de tomar decisiones en cuanto a la política minera. La UNSAM también participa dentro de la Plataforma de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales.

Las fortalezas de las universidades son el saber técnico, la legitimidad y su anclaje territorial, ya que hay universidades presentes en todas las provincias con minería e hidrocarburos. Trabajan articuladas con la sociedad civil y con las empresas⁸¹. Una debilidad es la falta de consenso entre las unidades académicas que componen estas instituciones.

El sector sindical

Las organizaciones sindicales tienen por objetivo lograr beneficios para sus afiliados (mejoras en el salario y las condiciones de trabajo). Su necesidad es el desarrollo y crecimiento de la actividad extractiva para que los empleados mineros y del gas y petróleo tengan inserción laboral. En el caso de la actividad minera, existe un único sindicato a nivel nacional, Asociación Obrera Minera Argentina, con representaciones locales en las principales áreas mineras. En la industria hidrocarburífera, si bien existe

un sindicato a nivel nacional con la federalización de los recursos naturales se han ido desarrollando representaciones gremiales regionales o provinciales que han incrementado su protagonismo como ser el Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa entre otros.

Pueblos Indígenas

En Argentina son numerosas las comunidades y los pueblos indígenas que han solicitado se les restituya las tierras de sus antepasados⁸². En muchos casos, su reclamo ha sido reconocido por el Estado. Cada pueblo indígena, a su vez, se divide en numerosos grupos. Las posiciones frente a las actividades extractivas son diversas entre comunidades y dentro de las mismas. Su relacionamiento con la industria es de distinto tipo: desde obtener puestos de trabajo en el yacimiento, incluyendo solicitudes de información sobre los proyectos y su impacto, pedidos de aportes para contribuir al desarrollo de las localidades impactadas hasta manifestaciones que se oponen a la actividad. Cada comunidad tiene su idiosincrasia y de ahí se deriva un mayor o menor involucramiento a favor o en contra de la actividad.

2.1.5. Marco legal

Las actividades extractivas se regulan a través de una serie de normas. En esta parte, se hace mención sólo a las normas nacionales. La legislación provincial es extensa y diferente de acuerdo a la jurisdicción donde se emplace el proyecto extractivo⁸³. La legislación argentina en lo relativo a los niveles de relacionamiento se centra, principalmente, en el nivel de información y de consulta. No existe legislación que dé tratamiento a los otros niveles de relacionamiento.



Información

La Ley General del Ambiente sancionada en 2002 prevé una instancia de información en su art. 16, 17 y 18 que entre otros ítems contempla la elaboración de un Informe Anual del Ambiente. Este dejó de realizarse hace unos años atrás, pero fue retomado en 2016. El informe de 2016 menciona algunos impactos del sector extractivo sobre los recursos hídricos y biodiversidad y reporte actividades de remediación al cierre de algunas minas⁸⁴.

Adicionalmente, la Ley General de Ambiente prevé desarrollar un sistema nacional integrado de información ambiental. Este sistema permitiría monitorear los efectos del sector extractivo sobre los principales parámetros ambientales. Sin embargo, aún no se ha implementado un sistema de información que dé cumplimiento a esta ley.

En 2016 fue sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) y su puesta en marcha rige a partir del 29 de septiembre de 2017. Cada ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y asimismo el Estado se obliga a publicar información de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable. La transparencia en la información juega un rol fundamental en la relación entre la industria extractiva y las comunidades, en particular, en lo relativo a impuestos y regalías y destino de la recaudación.



Consulta

En cuanto a la consulta pública, la Ley del Ambiente prevé una instancia de participación ciudadana en sus artículos 19 y 20 (derecho a ser consultado, institucionalización de la audiencia pública o consulta). También, agrega que la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio.

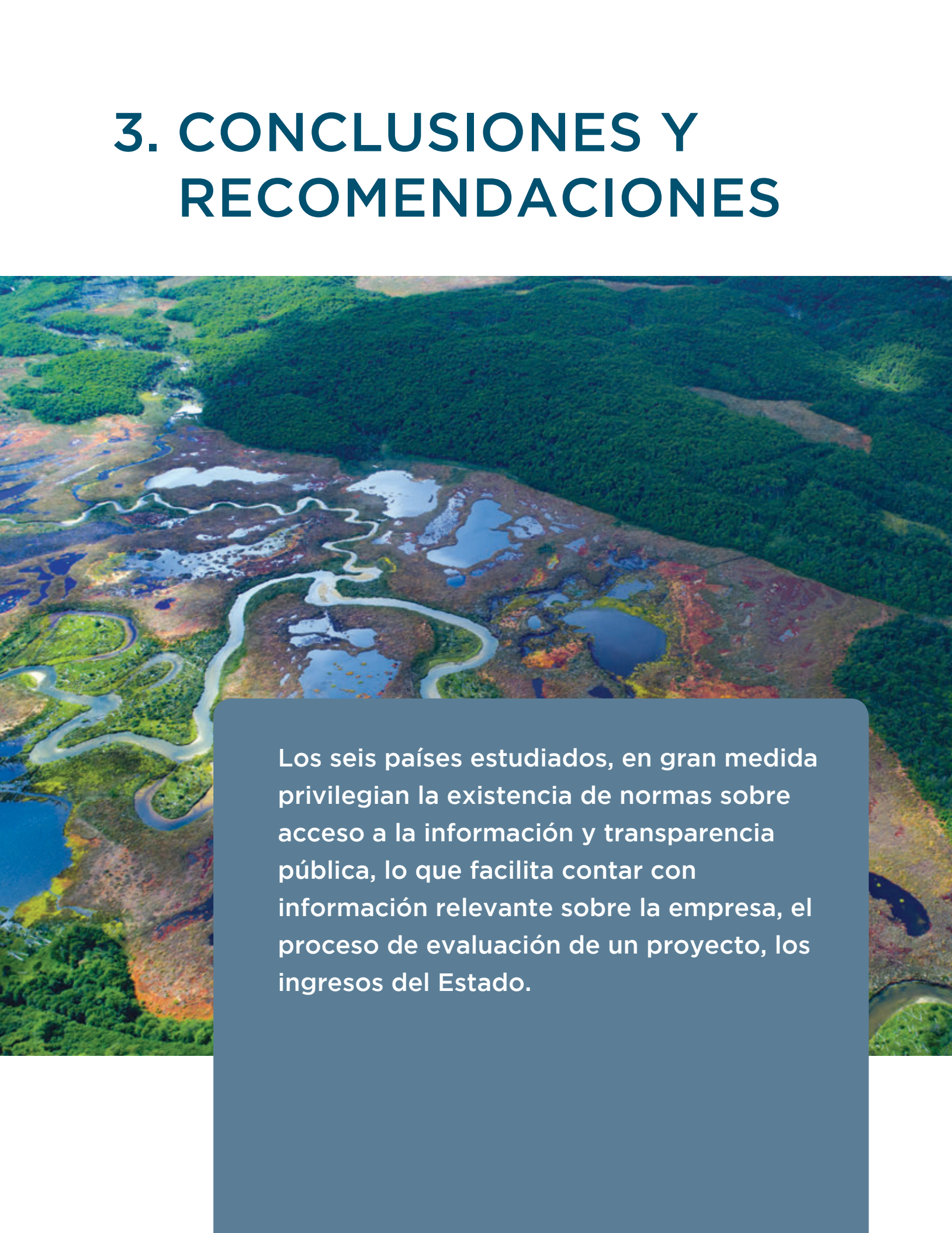
“En el Código de Minería no se prevé, entre otras cosas, la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Hecho que la Ley General del Ambiente si incluye. Las provincias deberían al reglamentar las leyes aplicar el principio de congruencia, pero cada provincia regula de manera distinta”⁸⁵.

Las audiencias públicas son instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que generen efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión de los participantes no es vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

En el caso de la minería existe la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad Minera (Ley 24.585) que hace referencia a la obligatoriedad de presentar un informe de impacto ambiental de los responsables de llevar adelante operaciones mineras pero no prevé una instancia de consulta o audiencia pública. Sin embargo, algunos proyectos han llevado a cabo el proceso de audiencia pública (ej. Minera Triton Argentina).

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Congreso Nacional a través de la ley 24.071 en 2000 pero aún no ha sido reglamentado.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita contar con información relevante sobre la empresa, el proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del Estado.

3.1. Conclusiones

Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores

- El sector extractivo sigue manteniendo un sitio de importancia en cuanto a su aporte a la economía de América Latina, a pesar de la conclusión del denominado súper ciclo de los commodities mineros e hidrocarburíferos. Los marcos normativos nacionales se adecuaron para promover el arribo de grandes inversiones en este sector, como se puede apreciar en la apertura del sector hidrocarburífero en México, anteriormente bajo el monopolio estatal, con la reforma energética del 2014. Estas políticas han contribuido a que ingresen corporaciones internacionales las cuales han aumentado el nivel de los estándares de relacionamiento comunitario, y como consecuencia del incremento de la recaudación fiscal han contribuido, en conjunción con la sociedad civil, a impulsar mecanismos multi-actor que favorecen la transparencia, como es el caso de la EITI que viene operando auspiciosamente en algunos países de la región.

Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento:

- En relación a los marcos normativos nacionales, aparte de la normativa referida a la industria extractiva, medioambiental, fiscal y de desarrollo, los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre la empresa, proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del estado en algunos casos. La información que proveen las industrias extractivas al Estado en el marco de sus obligaciones está sujeta a este marco regulatorio.
- Igualmente, las normas que contemplan la participación ciudadana como derecho a participar en las distintas fases de la actividad extractiva están muy extendidas en los seis países estudiados y se manifiesta, como una de sus dimensiones, a través de la figura de la consulta pública.
- La información identificada en cada país da cuenta de que no existe normatividad específica referida a otros niveles de relacionamiento como colaboración o alianzas a excepción de Perú que cuenta desde el año 2010 con una norma que establece un compromiso previo de la empresa con las comunidades del área de influencia, como requisito para el desarrollo de las actividades extractivas.
- El diálogo es un mecanismo que se encuentra, en sentido amplio, en todos los niveles de relacionamiento comunitario y está incorporado en segmentos de la normativa vigente al momento de regular los procedimientos participativos y de consulta.
- La mayoría de los países de este estudio han firmado el Convenio 169 de la OIT, salvo República Dominicana, pero solo Colombia, Perú y Chile cuentan con una reglamentación para implementarlo. De hecho, en los otros países el proceso depende de la interpretación hecha por las empresas y las autoridades locales, con posibilidades de cuestionamiento y judicialización del proceso, causando inestabilidad e inseguridad para las partes.

Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador

- Cuando las prácticas están conformadas por varios niveles de relacionamiento, frecuentemente es el nivel de diálogo el que suele articularlas. Los diálogos podrían evolucionar hacia la definición de agendas de trabajo específicas.
- Debido al grado de complejidad que exige su implementación, por lo general, el relacionamiento a través de los niveles de colaboración y de alianza, suele producirse a través del diálogo multi-actor, en su versión más estructurada, al que fundamentalmente se recurre como mecanismo más propicio para aclarar los intereses y necesidades de las partes, así como para generar la confianza necesaria que exigen estos procesos complejos y negociar acuerdos de beneficio mutuo.
- El relacionamiento multi-actor adecuadamente organizado y gestionado y con mirada estratégica e integral, contribuye a implementar proyectos vinculados a planes de desarrollo local, a elevar las voces de los actores involucrados, a influir en las decisiones sobre la operación, así como sobre los planes de relacionamiento, a mejorar la relación y a contribuir al logro o la vigencia de la licencia social.

Sobre los principales actores

Sociedad Civil

- Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades, las ONG y los movimientos sociales, asumen diferentes roles frente a la industria extractiva: como proveedores o contratistas que ejecutan proyectos sobre desarrollo; tendiendo puentes e impulsando procesos colaborativos; siendo críticos de la forma como viene operando la industria; promoviendo el debate y haciendo incidencia en políticas públicas y en garantizar derechos individuales y colectivos de las comunidades u oponiéndose abiertamente a la actividad extractiva a través de acciones de resistencia.
- Las universidades que gozan de legitimidad son importantes recursos locales puesto que tienen la confianza de una cantidad relevante de actores como el poder de tejer redes con actores claves de diferente naturaleza, tanto en materia de generación de conocimiento como en el fortalecimiento de capacidades. Son vistos como un actor especializado e imparcial para asuntos técnicos y para realizar investigaciones sobre la industria extractiva.
- Las OSC se desempeñan también desde un rol de terceros en los procesos de relacionamiento entre comunidades y empresas, sea facilitando el diálogo o la negociación entre las partes, asesorando los procesos, capacitando a la empresa y/o comunidad para una participación adecuada y constructiva en los procesos, siendo observadores, o acompañando en la implementación de los proyectos de desarrollo.

Estado

- La relación entre el Gobierno Nacional/Federal con los Gobiernos Regionales/Estatales/Provinciales y Locales suele generar tensiones derivadas de las políticas y medidas referidas a la gobernanza de los recursos naturales. En situaciones extremas, las tensiones, eventualmente, han llegado a una franca oposición y rechazo hacia la industria extractiva. Resulta, por tanto, importante que los diferentes niveles de gobierno establezcan mecanismos de coordinación y diálogo intergubernamental para la discusión concertada e implementación de políticas públicas referidas al desarrollo económico sustentable, y determinen cuál es el papel que juegan las industrias extractivas en el desarrollo del país y los territorios locales.

Empresas

- Los equipos dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario son imprescindibles para la operación de campo, articulados con las otras áreas de las empresas. Esta articulación interna es importante y necesaria. En algunos casos, las empresas optan por la contratación o suscripción de acuerdos con consultoras, organizaciones/entidades comerciales o de la sociedad civil especializadas en gestión social y relacionamiento comunitario. En algunos casos considerar a un equipo externo para apoyar el relacionamiento comunitario facilita los encuentros de diálogo, además de contar con una mirada externa del proceso.
- Los gremios de las industrias extractivas tienen como finalidad fundamental representar los intereses y necesidades de las empresas afiliadas. Tienen el potencial de ser importantes contribuyentes a través de proyectos dirigidos a las empresas en su relacionamiento con las comunidades, incluyendo perspectivas innovadoras, como la buena práctica de las Cuencas Sociales de Argentina, que desde la Cámara de Minería de Salta articula a las diferentes empresas mineras que operan en un territorio en su relacionamiento con las comunidades del entorno.

Sobre los temas abordados en las prácticas

- Las buenas prácticas incorporan una gama temática sumamente amplia, vinculadas a las necesidades humanas y derechos de los entornos sociales y a las necesidades operativas de los proyectos extractivos. Desde un nivel básico de información sobre el proyecto, todos los niveles de relacionamiento dan pie a la incorporación de asuntos de múltiples tipos, como:
 - » Temas ambientales, como aquellos vinculados al agua, aire, ruido, uso de la tierra;
 - » Búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad vinculadas a las necesidades de la operación (infraestructura en salud, vialidad, electricidad, agua potable, entre otros);
 - » Manufactura de productos;
 - » Educación y servicios básicos;
 - » Asuntos que atañen a grupos específicos como mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad;
 - » Cuestiones sobre desarrollo local;
 - » Establecimiento de relaciones duraderas en el marco del desarrollo sostenible y la licencia social;
 - » Fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y local.

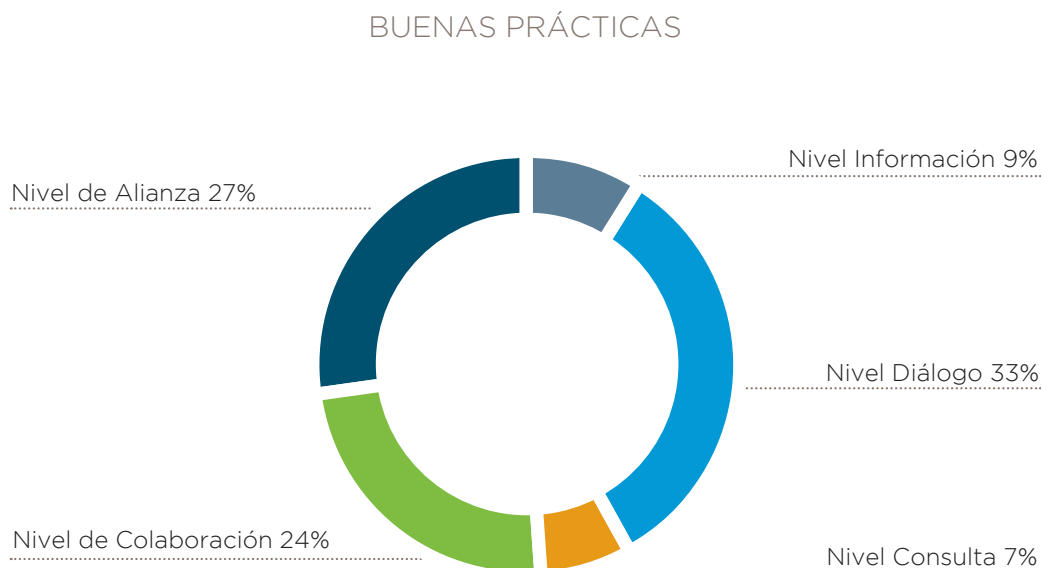
Sobre el relacionamiento

- *Aporte del sector extractivo en la economía nacional y regional:* Existe un reconocimiento de parte de todos los actores que el sector hace aportes relevantes a la economía nacional. Sin embargo, a nivel local las comunidades aun sienten que existe una deuda pendiente de parte de la industria al desarrollo y mejora local.
- *Estándares mínimos de relacionamiento:* La industria extractiva, en relación con otras actividades económicas, considera el tema del relacionamiento con las comunidades del área de influencia como parte relevante, inclusive en ocasiones como parte clave para el negocio y no como un tema netamente voluntario. Existe consciencia de los potenciales costos que puede significar para el desarrollo de un proyecto extractivo un entorno de riesgo social.
- *Lo exigido y lo voluntario:* Los procesos de relacionamiento reflejan que el comportamiento de la industria se derivan tanto de las normas definidas por el Estado como por las políticas internas de las empresas (códigos de conducta) y los estándares de la industria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado está empezando a asumir un rol más activo en definir estándares mínimos de relacionamiento, en base a las buenas prácticas reconocidas y con ello dar seguridad tanto a las empresas como a las comunidades sobre la mejor forma de establecer relaciones armoniosas y constructivas orientadas al desarrollo sostenible. Adicionalmente la industria sigue avanzando en políticas voluntarias que benefician el desarrollo del territorio en la cual está la operación.
- *Las OSC:* En los últimos 5 años han cumplido un importante rol, logrando una cierta incidencia en las decisiones de políticas públicas, a la hora de proponer, acompañar y velar por el cumplimiento de la normativa de los proyectos de la industria extractiva. Han logrado en los diferentes niveles (local, regional/provincial y nacional) de incidencia, que se reconozcan sus aportes para alcanzar objetivos comunes con la industria. Sin dudas esta incidencia se vio favorecida por el uso masivo de las redes sociales y el desarrollo de la transformación digital.
- *El relacionamiento con la sociedad civil en continuum:* La construcción de confianza es una tarea prioritaria. Adicionalmente quienes faciliten y participen en estos espacios de construcción de buenas prácticas de relacionamiento deben ser actores con conocimiento y trayectoria en esta materia, que faciliten los procesos de interacción; actores imparciales que construyan un relacionamiento permanente y útil reconociendo las diferencias de cada una de las partes.
- *Percepciones respecto a las industrias extractivas:* Aún existe rechazo hacia el sector extractivo por parte de algunos sectores. Generalmente, estos se basan en la percepción de que el crecimiento de la actividad extractiva no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades que conviven con los proyectos extractivos, y que en algunos casos han visto desplazadas las actividades económicas previamente existentes (agricultura, turismo local, ganadería, entre otras), generando dependencia a una actividad finita, además de la preocupación por los impactos ambientales y a la salud que pudiera traer consigo esta actividad.

- *De conflicto al acuerdo negociado:* La revisión de algunas prácticas estudiadas da cuenta de que la relación entre la industria extractiva y las comunidades ha pasado de un proceso de conflicto y oposición a un proceso de negociación transaccional que compensa a las comunidades con beneficios sociales, empleo y obras de infraestructura. Esta dinámica eventualmente aporta a los procesos de desarrollo local.
- *Tejido interno de las comunidades:* Muchas veces, la complejidad de las relaciones al interno de las comunidades han generado tensiones que se traducen en reclamos de difícil comprensión y donde las empresas sin contar con metodologías para abordar la conflictividad de manera más amplia e integral.
- *Rol del Estado:* La característica histórica del Estado ha sido conservar una posición distante y mirar desde afuera los procesos de relacionamiento que se dan en los diferentes niveles entre las empresas y las comunidades. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un actor clave en el nivel de consulta.

Sobre las prácticas de relacionamiento

- Este estudio ha encontrado en los diagnósticos de los seis países 27 buenas prácticas en todos los niveles de relacionamiento, 5 a nivel de Información, 18 a nivel de Diálogo, 4 a nivel de Consulta, 13 a nivel de Colaboración, y 15 a nivel de Alianza. Cabe agregar que en la mayoría de las buenas prácticas se han identificado dos o más niveles simultáneamente.



- Grandes avances: Las buenas prácticas del estudio muestran que ha habido varios avances en miras a mejorar la relación entre la industria y las comunidades, tales como la incorporación de políticas corporativas de relacionamiento, equipos de profesionales especializados y recursos económicos. Sin embargo, todavía hay debilidades en el relacionamiento entre la sociedad civil y las industrias extractivas. Las experiencias documentadas han contribuido al aprendizaje y a la generación de nuevas e innovadoras prácticas de relacionamiento que pueden ser aprendidas, mejoradas y replicadas en otros proyectos.
- Se considera que el sector extractivo tiene una gran experiencia de buenas prácticas, reconocidas y validadas con resultados positivos para la calidad de vida y el relacionamiento de actores, labor que debería ser orientada tanto a las comunidades, academia como a las propias empresas.
- Un conflicto observado en la mayoría de las buenas prácticas estudiadas es la oposición al proyecto por parte de la comunidad, por la forma en la que el proyecto convive con su entorno (ambiental, social, cultural) y/o por la falta de beneficios directos y al desarrollo de la comunidad. El diálogo se destaca como el canal necesario para resolverlo, siendo una alternativa para establecer acuerdos y negociar con la comunidad. Los espacios de diálogo se hacen necesarios para resolver las problemáticas de pequeños sectores rurales del entorno de una gran explotación extractiva. Por ejemplo, alianza para mejorar la producción ganadera .
- Instancias de participación ciudadana temprana: Las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no cuentan con la participación efectiva y el consenso de los gobiernos locales y comunidades de los territorios. Sin este paso que le da legitimidad social al proyecto, los procesos de participación ciudadana (incluyendo la consulta previa) se tornan complejos, lentos y/o conflictivos.
- Las alianzas entre OSC han comenzado a jugar un papel de acercamiento comunitario, como es el caso del Clúster de Energía Coahuila cuyo papel, entre otros, es informar sobre las implicaciones de la reforma energética y el nuevo papel de las empresas en la región. La intermediación de la sociedad civil puede ayudar en que la información sea más confiable y por ello mejor aceptada por las comunidades.

3.2. Recomendaciones

Para las empresas

- Contar con una planificación temprana, oportuna y a largo plazo de relacionamiento con las comunidades que contribuya al progreso económico y atención de temas de orden social y ambiental en los territorios donde desarrollan sus proyectos.
- Contar con un área dedicada exclusivamente a la gestión social y las relaciones comunitarias. Este estudio, ha podido constatar que contar con un área y equipo de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a desarrollar mejores prácticas.
- Considerar las particularidades del territorio y asimilar como una buena práctica el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades. Se recomienda incluir dentro de sus protocolos de debida diligencia un levantamiento de información detallada sobre la dinámica del territorio y las comunidades presentes en el área de influencia, ya sea de la mano de la comunidad o posteriormente validada por ella.
- Coordinación regular con los líderes comunitarios desde el principio involucrándolos en los diferentes niveles de relacionamiento, información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas.



- Generar acciones por nivel de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas que sean revisadas sistemáticamente, que incluyan plazos para su revisión y que sean flexibles para ser replanteadas, que tengan objetivos, metas y tiempos bien definidos desde el principio, que se apeguen a la legislación y que busquen un relacionamiento con acompañamiento constante y sistemático.
- Seguimiento a las acciones derivadas de la legislación referida a las industrias extractivas, en lo ambiental y en lo social, con el cumplimiento y continuidad a los acuerdos de las mesas de diálogo con coordinación intersectorial e intergubernamental.
- Fortalecer a los gremios y organizaciones representativas de las empresas que pueden participar en los más diversos espacios de diálogo y concertación para una mayor fluidez en el relacionamiento.
- Propiciar capacitaciones para fomentar alianzas con proyectos en los territorios, incentivando la participación comunitaria.
- Considerar a las Agencias Multilaterales de Desarrollo (MDB por sus siglas en inglés) líderes en América Latina y el Caribe que cuentan experiencia en el relacionamiento ciudadano²⁷¹ para un enfoque interdisciplinario en la región y con experiencia comparada en temas de sociedad civil como aliados técnicos en la elaboración de planes de relacionamiento, así como a OSC del país con experiencia territorial, para fortalecer los principios de relacionamiento entre empresas y comunidades gracias a sus conocimientos técnicos y cercanía con la comunidad.
- En la medida que las actividades extractivas van a producir afectaciones ambientales, se recomienda que las empresas prioricen el cumplimiento ambiental en el marco de las legislaciones nacionales, así como el relacionamiento social con información oportuna, veraz y transparente, promoviendo el relacionamiento con las comunidades para el análisis de los problemas y la toma de decisiones.

Para la Sociedad Civil

- Formar una estructura orgánica que permita dar a conocer los líderes comunitarios representativos como legitimados para dar información en tiempo oportuno, interactuando con el gobierno, las empresas y otras comunidades si fuera el caso, para la elaboración de iniciativas conjuntas en el marco de un relacionamiento sistemático y no solo circunstancial.
- Por la disparidad de culturas, ritmos y tradiciones, es necesario que el Estado y las empresas adapten espacios de relacionamiento a esta realidad. Asimismo, las propias comunidades para alcanzar resultados efectivos han de identificar los recursos para acercar sus enfoques de un modo oportuno.

- Asegurar la integración de los miembros de las comunidades por parte de los líderes comunitarios, en las decisiones sometidas a consulta como así en aquellas instancias de influencia a través de mesas temáticas que contemplen la disparidad de género, y con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como la apropiación de conocimientos por parte de la comunidad. El trabajo de los líderes comunitarios para la participación significativa de la comunidad evidenciada en las prácticas analizadas ha sido clave para transformar la percepción que tienen las comunidades sobre la industria extractiva, mejorar las relaciones existentes y prevenir el surgimiento de conflictos.
- Los líderes comunitarios deben estimular y promover la disseminación de información oportuna así como diálogos con miembros de la comunidad y de las personas de las empresas cuyas labores están relacionadas, para la elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en las distintas fases de la actividad extractiva.
- Los líderes comunitarios y las empresas pueden apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados a fortalecer capacidades de diferentes grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, minorías) en procesos que incorporen una mirada integral de territorio, para que se pueda tener un desarrollo sostenible e independiente de la presencia de la empresa.
- Contactar a actores imparciales, (como universidades), para la resolución de problemas y toma de decisiones en relación a conflictos internos de la comunidad o con los otros actores (gobiernos, empresas).

Para el Estado

- Implementar acciones de monitoreo periódico para recibir retroalimentación sobre la percepción que tienen tanto la sociedad civil como la empresa. La experiencia muestra que el monitoreo es importante para involucrar a otros actores y sectores, comunicar sobre la práctica, dar más transparencia y hacer ajustes necesarios de acuerdo con especificidades locales.
- Contar con metodologías para las consultas públicas incluyendo a las autoridades locales, minorías (grupos de mujeres, ancianos, jóvenes). Se sugiere construir procesos sistemáticos y periódicos de los niveles de información y diálogo, habilitando la colaboración con mecanismos de quejas, accesibles desde la misma comunidad y de forma anónima.
- Promover la participación ciudadana temprana indispensable para generar espacios de relacionamiento que promuevan oportunidades de crecimiento y mitiguen impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, prevenir conflictos, construir confianza y legitimidad social, así como optimizar el valor potencial en las regiones.
- Reglamentar la aplicación de la Convención OIT 169 con estándares mínimos para las consultas públicas. Respaldar la labor de los organismos de supervisión, fiscalización y de revisión de los estudios ambientales, sosteniendo y afinando los mecanismos de participación y Consulta Previa (Convenio 169 OIT), el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos.
- Fortalecer los instrumentos ambientales que permitan a la autoridad ambiental vigilar el cumplimiento de los planes de mitigación y los compromisos en materia del cierre de proyectos extractivos. La planeación anticipada del cierre económico y ambiental

es un aspecto de gran relevancia para contener pasivos ambientales y sociales y a la postre mejorar la percepción que tienen las comunidades en la zona de influencia de los proyectos y de la población en general.

- Fortalecer mecanismos de transparencia para la administración de los fondos generados por las rentas de la actividad extractiva apoyando nuevos proyectos, que a su vez generen nuevos emprendimientos en las regiones ricas en recursos naturales de modo de asegurar la creación de empleos de fuentes alternas, que fortalezcan las economías locales innovando y generando ingresos a largo plazo.
- Capacitar a los gobiernos locales sobre los temas que afectan los intereses de sus territorios, apoyando la generación de capacidades políticas y técnicas que apoyen y articulen los procesos de ordenamiento territorial.

Para los tres actores

- Utilizar las nuevas tecnologías a favor de formas más eficaces de relacionamiento. La madurez de los sistemas democráticos de la región, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, está dando una oportunidad sin precedentes para que responsables de los gobiernos, oficiales de empresas y líderes comunitarios cuenten con nuevos instrumentos de acercamiento e información para la discusión de intereses territoriales comunes.
- Tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y de las comunidades, resulta relevante fomentar y acercarse a través de espacios de relacionamiento con acciones de información oportuna y confiable; promoción de diálogos que incluyan minorías, consultas públicas siguiendo regulaciones sectoriales que hayan contado con instancias de información y dialogo previos, promoción de colaboraciones en formación de capacidades que permitan un desarrollo territorial sostenible, promoción de alianzas en acciones de monitoreo participativo y/o de desarrollo de pequeñas empresas.
- Construir planes de relacionamiento iniciado por cualquiera de los actores principales, con actividades claras genera confianza, por lo que un rol más activo del gobierno y de grandes empresas en el fomento de espacios de concertación, donde las comunidades participen contando con la previa información y capacitación para exponer intereses y preocupaciones representa, como lo demuestran los hallazgos, un avance para el crecimiento sostenible.
- Incluir a otros recursos existentes, OSC locales, y sobre todo universidades con legitimidad para fortalecer un relacionamiento sostenible.
- Informar y revisar las proyecciones sobre los recursos de las industrias extractivas y los límites para la dinamización de la economía, reconociendo que esta es una actividad que depende de una serie de variables ajenas a planificaciones específicas. En particular, los espacios subnacionales han de proyectar sus actividades considerando recursos de otras fuentes y del sector extractivo, de forma de no generar frustraciones por eventuales variaciones en las transferencias desde el gobierno nacional. En este aspecto se requiere reforzar la información y análisis de las proyecciones de las industrias extractivas con autoridades y líderes de la sociedad civil, teniendo como base las acciones de transparencia de las industrias extractivas en marcha.

Notas del diagnóstico regional

1. La mayoría de los proyectos extractivos se encuentra en el área rural y las comunidades aledañas son los principales actores afectados con los que se buscan relacionar las empresas en primera instancia. Otros actores importantes son municipios pequeños con un alto índice de población rural. Proyectos cercanos a ciudades medianas o grandes, como en el caso de Arequipa, Perú, o en Chile, son menos frecuentes, ver por ejemplo: Valor Minero, 2017: Los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en la zona central, Las Condes; Valor Minero, http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios_desarrollo_futuro_mifffferia_zona_central.pdf.
2. Cameron, Peter, y Michael Stanley, 2017: Oil, gas and mining – A sourcebook for understanding the extractive industry, Washington: The World Bank, p. 19.
3. Los criterios como también los detalles de la metodología empleada se encuentran en el anexo 1.
4. Ver marco metodológico conceptual (anexo 2). Para mayor información ver BID, 2018: Grupo BID – Sociedad Civil, <https://www.iadb.org/es/sociedad-civil/home>
5. Ver Milano, Flavia y Andrea Sanhueza, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para agencias ejecutoras pública y privadas, Washington: BID, <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
6. A los fines de esta investigación son los recursos no renovables petróleo, gas y minerales metálicos, estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación)
7. La página web de la ICCM es <http://www.icmm.com/en-gb>
8. Los miembros del ICCM se comprometen a cumplir con 10 principios para contribuir al desarrollo sostenible, ver: ICCM, 2015: Sustainable Development Framework: ICCM Principles, London: ICCM, http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015_icmm-principles.pdf
9. La página web de la IOGP es <http://www.iogp.org>
10. Con este fin, IOGP ha formado diferentes comités, como por ejemplo el de ambiente, que pretende poder responder a las demandas de diferentes actores, ver: IOGP, 2018: Our committees, <https://www.iogp.org/our-committees/>.
11. Wilson, Emma, Sarah Best, Emma Blackmore y Saula Espanova, 2016: Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries, London: International Institute for Environment and Development, <http://pubs.iied.org/pdfs/16047IIED.pdf>.
12. Por un lado, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron lanzados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con empresas y algunas organizaciones no gubernamentales, en 2000, ver: Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre del 2000, http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf. Son los únicos estándares de Derechos Humanos que están diseñados exclusivamente para el sector extractivo. Actualmente, se han adherido 30 empresas a los principios, ver: Voluntary Principles, 2018: For companies, <http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/>. Por otro lado, en 2011 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se aplican a los Estados y a todas las empresas transnacionales y de otro tipo, ver: Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2011: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos – Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar”, Nueva York / Ginebra: NNUU, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf.
13. Salmón, Elizabeth (coord.), 2016: La Progresiva Incorporación de las Empresas en la Lógica de los Derechos Humanos. Lima: Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDHPUCP), p.17-18.
14. Diferentes estudios constatan los retos de una mayor vinculación de la economía local con el sector extractivo en los países de América Latina. Ver por ejemplo: Rudas, Guillermo, 2014: Notas sobre la minería de carbón a gran escala en Colombia, en: FES (Friedrich Ebert Stiftung): La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales, Análisis 1/2014, p. 5-22. Albriue, Ramiro, 2012: La macroeconomía de los recursos naturales en América Latina, en: Albriue, Ramiro; Andrés López, y Guillermo Rozenwurcel (coord.) Los Recursos Naturales como Palanca del Desarrollo en América Del Sur: ¿Ficción o Realidad? Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, p. 105-147.
15. Ed O’Keefe, director de Synergy Global, en una entrevista realizada por Sarah Busque, el 10 de diciembre de 2013, en: Borealis, 2013: Claves para mejorar las prácticas en las relaciones comunitarias, <https://www.boreal-is.com/es/blog/mejorar-relaciones-comunitarias/>.
16. Wilson 2016, cit. arriba.
17. Ibid.
18. ICCM, 2012: Mining’s contribution to sustainable development, InBrief, Junio 2012). Ver también: López-Morales, José Satsumi, y otros, 2017: Strategies of social responsibility in Latin America: a content analysis in the extractive industry, en: Ad-Minister (Universidad Eafit), No. 31 julio a diciembre 2017, pp 115-135.
19. Oxfam Internacional y Social Capital Group (SCP), 2007: Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú.
20. Es importante diferenciar el gobierno nacional como poder ejecutivo de otros actores estatales como el poder judicial o el poder legislativo. El análisis a continuación se refiere al poder ejecutivo exceptuando cuando sea señalado de otra manera.
21. Ver Penfold, Michael y José Luis Curbelo, 2013: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera directa. Tendencias y realidades en América Latina, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 10 / 2013. Corporación Andina de Fomento (CAF).
22. Medina, Leandro, 2010: Efectos dinámicos de los precios de las materias primas en las posiciones fiscales de América Latina, CAF Working Papers No 2010/02.
23. Marczak, Jason y Peter Engelke, 2016: América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, Washington: BID, p. 21.
24. Datos de los diagnósticos de este estudio. Estas cifras no incluyen el empleo indirecto.
25. Monge, Carlos, 2017: Minería y marco institucionales en la región andina, Lima: NRGi / GIZ, p. 3-14.
26. Marczak 2016, cit. arr., p. 21
27. El único país de este estudio que no ha ratificado el convenio 169 es la República Dominicana.
28. En Argentina, no existe norma legal que regula el convenio. En México, la reforma constitucional de 2011 incorporó el Convenio 169 de la OIT a la constitución que está regulado mediante un protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicado mediante decreto, ver: Castillo Lara, Clara, 2017: La constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en: Alegatos, No. 97, p. 575.

29. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
30. En Chile, hay un Ministerio de Minas y otro de Energía.
31. CONADI, 2018: <http://www.conadi.gob.cl/>
32. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
33. Salinas Alvarado, Carlos Eduardo, 2011: La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia, consultado en: <https://revistas.ueh.ueh.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>.
34. Wilson, Emma, 2016, cit. arriba.
35. Ibid.
36. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
37. De hecho, "en muchos países de América Latina las consultas populares sobre minería se han convertido en un conflicto entre gobiernos nacionales, por un lado, y gobiernos locales y actores sociales", ver: Dietz, Kristina, 2017: Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa, en: Colombia Internacional (93), 93-117, p. 96.
38. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), 2014: Pactos Igualdad – Hacia un futuro sostenible, p. 294 - 298.
39. Sanborn, A. Cynthia, y Juan Luis Dammert, 2013: Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú, Americas Quarterly, p. 26. Perry, Guillermo y Mauricio Olivera, 2009: El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia, CAF, documentos de trabajo 2009/06.
40. Mayores ingresos para los gobiernos locales no necesariamente se traducen en una mejora de la calidad de vida. Ver por ejemplo: Paredes Gonzales, Maritza Victoria, 2016: Los efectos del boom de las industrias extractivas en los indicadores sociales – países andinos, Natural Resource Governance Institute. Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Cobre, 2013: Minería en Chile: impacto en regiones y desafíos para su desarrollo; Chile.
41. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
42. IIED, y otros (International Institute for Environment and Development, Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, World Business Council for Sustainable Development), 2002: Abriendo brecha: minería, minerales y desarrollo sustentable, IIED, p.224.
43. Respecto a las diversas necesidades de formación, ver por ejemplo: CEPAL / UNCTAD, 2003: Guía para la gestión de las autoridades locales de pueblos y distritos mineros de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, consultado en: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/13966/lcr2114e.pdf>.
44. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
45. IIED, y otros, 2002, cit. arriba, p. 204.
46. Astorga, Eduardo, Francisco Carrillo, Mauricio Folchi, Magdalena García, Bernardo Grez, Bernardita McPhee, Claudia Sepúlveda, y Hans Stein, 2017: Resumen ejecutivo informe final proyecto: evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el período 1998 – 2015, Santiago de Chile: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), p. 12-13.
47. Watkins, Graham, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, María Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, Andreas Georgoulas, 2017: Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, Washington: BID, p.20-1.
48. Davis, Rachel y Daniel Franks, 2014: Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, Harvard: Harvard Kennedy School.
49. Ibid., p. 21.
50. Wilson, Alana y Miguel Cervantes, 2013: Survey of Mining Companies 2013: Vancouver: Fraser Institute.
51. Watkins et al 2017, cit arriba, p.5
52. Saade, Hazin, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile CEPAL.
53. Franks et al. 2014, cit. arriba, p. 7576
54. Ibid
55. CEPAL: Argentina: Perfil Nacional Económico, http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish.
56. Elaborado sobre la base de datos del INDEC: https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39, según categoría: Minas y Canteras.
57. Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal de Impuestos Período 2017 (1): <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ley23548.pdf>.
58. Cabe destacar que el sector de hidrocarburos tiene una mayor preponderancia en la cantidad de puestos de trabajo registrados con un 66,6% de los empleos registrados en 2016, en comparación con los 33,4% de los empleados de la industria minera metalífera para el mismo año. Elaborada sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_empleo.asp
59. Jueguen, Francisco, 2017: El desempleo terminó 2016 en 7,6%, según el Indec, en La Nación, 16 de marzo de 2017, <https://www.lanacion.com.ar/1994231-el-desempleo-termino-2016-en-torno-al-76-segun-el-indec>. Según este artículo, la PEA fue de 18 millones de personas en 2016.
60. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, www.noalamina.org.
61. Fundación Cambio Democrático, 2017: Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Capital Federal, <http://cambiodemocratico.org/2017/02/07/plataforma-argentina-dialogo-para-uso-sustentable-recursos-naturales/>.
62. El Atlas de Justicia Ambiental es liderado por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su propósito es recolectar historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo el mundo. Los datos son enviados desde los diferentes países por academia, ciudadanos preocupados, comités informales y organizaciones no gubernamentales. Un equipo de edición verifica los datos. Es importante mencionar que el tipo y el número de los conflictos registrados depende de la perspectiva de los actores que envían los datos por lo que no se trata de un dato objetivo. En este documento, se emplean los datos del atlas cuando no existe una cifra más confiable en el país, como es el caso de Argentina. Para mayor detalle de la metodología del Atlas, ver: Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology 22: 255-278. El link de acceso al Atlas de Justicia Ambiental es: <https://ejatlas.org/>.

63. CIPPEC, Fundación Vida Silvestre, y Consejo Empresarial Mendocino, 2015: Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza, <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1052.pdf>.
64. Chubut (Ley 5001, 2003), Tucumán (Ley 7879, 2007), Mendoza (Ley 7.722, 2007), La Pampa (Ley 2349, 2007), Córdoba (Ley 9526, 2008), San Luis (Ley 634, 2008), Tierra del Fuego (Ley 853, 2012)
65. Conflicto Famatina: desde 2004, se realizan en Famatina, provincia de La Rioja, acampes, marchas y cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas. Así la población ha logrado impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, el de la salteña Midais tras la pancarta de "El Famatina no se toca" Conflicto Esquel: en julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto ubicado a diez kilómetros de esta ciudad. Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal y en noviembre nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Luego de varias marchas, el Concejo Deliberante aprobó una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación del yacimiento de oro y plata. Si bien la consulta no era vinculante los resultados hicieron que se suspendiera la ejecución del proyecto.
66. Velarde Ponce de León, Claudia, 2018: Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina, <https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina>.
67. Se han identificado una serie de otras prácticas que no han podido ser validadas en el marco de este estudio. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.
68. La investigación de campo concluyó en 2017, por lo que se puede asegurar la duración de la buena práctica solo hasta este año, lo que no excluye la posibilidad de que sea vigente en el futuro. Esta observación es válida para todas las buenas prácticas.
69. Este espacio es accesible a la comunidad y ésta ha planteado dentro del mismo problemáticas a las cuales se les ha buscado soluciones (falta de leña - donación, falta de capacitación minera - aula móvil, falta de comunicación - wifi libre para toda la comunidad)
70. La innovación se refiere a prácticas que fueron novedosas al momento de su validación en el país respectivo.
71. Cada buena práctica fue evaluada según las dimensiones participación, pertinencia y sostenibilidad en base a indicadores diseñados anteriormente. Para mayor información referirse al marco conceptual y metodológico, 4.3. (anexo 2).
72. Todas las buenas prácticas que incluyen el diagnóstico fueron analizados según la consideración de los siguientes enfoques: enfoque participativo, enfoque de regulación de derechos y obligaciones; enfoque de desarrollo sostenible; enfoque de diversidad; enfoque de igualdad de género; enfoque de transformación de conflictos. Las definiciones se pueden revisar en el marco conceptual (anexo 2). Si los enfoques no son mencionados en el análisis de la buena práctica, significa que no se han encontrado elementos que indican su inclusión en la implementación de la buena práctica.
73. Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration - an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario, p. 194.
74. Ibid.
75. Información suministrada por PAE.
76. Cámara Argentina de Empresarios Mineros: HMS, <http://www.caem.com.ar/hms/>.
77. Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse a provincia de La Rioja con su conflicto en Famatina antes mencionado y la postura del gobernador de la provincia. DyN, 2011, Beder Herrera les pidió a los ambientalistas que se "dejen de joder" con la minería, Clarín Noticias, 31/05/2011, https://www.clarin.com/medio_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria_Q_Skl-TiWawXx.html.
78. Una organización importante es Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). FARN ha realizado diferentes estudios, entre otros sobre la explotación de Litio. Respecto a las actividades extractivas sostienen: Los efectos sociales y ambientales de este tipo de actividades son demoledores: destrucción ecológica, pérdida de bosques naturales, deterioro del suelo, contaminación por agroquímicos, desplazamiento de comunidades locales, nula generación de empleo de calidad e incluso violación de derechos, entre otros. Desde FARN afirmamos que no existen políticas extractivas que sean amigables con la sociedad, ni con el ambiente (<https://farn.org.ar/actividades-extractivas>).
79. Un ejemplo es la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, un movimiento vecinal que surgió en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut y se extendió a otras localidades del país. Según su página WEB, ya se encuentran en 15 lugares del país. No posee una organización formal con cargos y funciones. Sus acciones y su presencia como grupo opositor a la minería son muy fuertes en Argentina. Para mayor información, véase: Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, cit. arr.
80. Universidad Nacional de San Martín, <http://www.unsam.edu.ar>
81. Puede mencionarse como ejemplo, las Universidades de San Martín y Tres de Febrero que realizaron durante varios años capacitaciones a los docentes de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la mina Bajo La Alumbrera
82. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación, 2015: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Tierras y registro nacional de comunidades indígenas, <https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/6.-INAI-Tierras-y-registro-nacional-de-comunidades-indigenas.pdf>
83. Por ejemplo, referente a las instancias de participación en el marco del Informe de Impacto Ambiental. Ejemplos son: Ley N° 123 de Evaluación del Impacto Ambiental de Buenos Aires, última modificación publicada el 18/05/2012. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, provincia de Santa Cruz, publicada el 21/08/2003. Ley 10.208. Política Ambiental Provincial (Córdoba), publicada el 27/06/2014.
84. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016: Informe del estado de ambiente 2016, Buenos Aires. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf.
85. Covo, María Julia, 2013: Derecho de minería y energía - El principio de congruencia de la ley general del ambiente en el Derecho Minero, en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 10, no. 43, p. 151-160; p. 153
86. La producción de petróleo y gas es marginal en Chile y la autora no encontró cifras macroeconómicas que incluyen el petróleo. La producción petrolera se concentra en ENAP, una empresa del Estado, cuyo objeto es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Para la producción de Gas Natural existen 10 empresas agrupadas en un gremio. El reporte de sustentabilidad de ENAP señala que la producción de petróleo en Chile, (Región de Magallanes) alcanzó 987 millones de barriles para 2016; en tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes), alcanzó a 1.004 millones de metros cúbicos estándar (5.909.500 barriles equivalentes). Las exportaciones de ENAP llegaron a 0,42 millones de metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo que equivale al 3,8% de la producción total de sus refinerías.

87. Consejo Minero, 2018: Cifras actualizadas de la minería, <http://dev.consejominero.cl/wp-content/uploads/2018/03/Cifras-actualizadas-de-la-miner%C3%ADa-Marzo-2018.pdf>.
88. Comisión Nacional de Productividad 2016: Productividad de la Gran Minería el Cobre, <http://www.comisiondeproductividad.cl/productividad-de-la-gran-mineria-del-cobre/>
89. Consejo Minero, 2018, cit. arr.
90. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
91. Consultado en: Sociedad Nacional de Minería, El nivel de empleo en la minería es el más bajo de los últimos siete años, <http://www.sonami.cl/site/noticias/el-nivel-de-empleo-en-la-mineria-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-siete-anos/>.
92. Comisión Chilena del Cobre, 2017: Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Metales 1997-2016, Santiago de Chile, <https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario-%20avance7-10-7-17.pdf>.
93. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
94. -Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, Santiago de Chile, <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5>.
95. Comisión Minería y Desarrollo de Chile Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014: Minería. Una Plataforma de futuro para Chile, http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una_plataforma_futuro_para_chile.pdf.
96. Hallazgos Mesa de Trabajo Industrias extractivas realizada el 18 de agosto 2017 en Santiago de Chile para este estudio.
97. Alianza Valor Minero, Seminario Valor Minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe_seminario_inversion_dialogo_desarrollo.pdf.
98. Informe Sistematización Caracterización Socio-Ambiental Proyecto Acuerdo Territorial Para El Desarrollo - Localidad De Sierra Gorda. Agencia de Cambio Climático- Alianza Valor Minero septiembre 2017.
99. Ibid.
100. No se cuenta con información de los montos de inversión social de las empresas en Sierra Gorda.
101. Alianza Valor Minero es una institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible, Valor Minero, <http://www.valorminero.cl/valor-minero/>
102. Chile Transparente, Transparencia Caimanes, Santiago de Chile, <http://www.chiletransparente.cl/project/transparencia-caimanes/>.
103. Nueva Unión, 2017: Corproa elige a Nueva Unión como "Empresa Destacada del Año", <http://www.nuevaunion.cl/noticias/2017/corproa-elige-a-nuevaunion-como-empresa-destacada-del-ano>.
104. Ibid.
105. Política de Pueblos Indígenas Nueva Unión. Consultada en : Nueva Unión, Sustentabilidad, <http://www.nuevaunion.cl/sustentabilidad>.
106. Desarrollo Futuro de la minería en la zona Central. Diagnóstico y recomendaciones para la sostenibilidad. Alianza Valor Minero. Noviembre 2017
107. Otras iniciativas entre diferentes sectores son Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo, Consejo Consultivo para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Grupo de Exploraciones Sustentables, Grupo de Trabajo Agenda 2030, Mesa de trabajo Mujer, Minería y buenas prácticas del ministerio de Minería.
108. Alianza Valor Minero, cit. arr.
109. Alianza Valor Minero, cit. arr.
110. Ministerio de Minería, Misión Institucional, <http://www.minmineria.gob.cl/mision-institucional/>.
111. Mapa de las organizaciones de la sociedad Civil 2015. Centro de Políticas Públicas Universidad Católica (2016).
112. Villalobos, Fernanda, 2017: Ambientalistas y rechazo a Dominga: Quiénes gobiernan "están tomando las decisiones correctas", Santiago de Chile, <http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html>.
113. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas , <http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas>.
114. Portal Minero, 2014: Corte rechaza recursos contra proyecto minero El Morro, <http://www.portalminero.com/display/NOT/2014/04/29/Corte+rechaza+recursos+contra+proyecto+minero+El+Morro?showComments=true&showCommentArea=true>.
115. OIT (2014) Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. Matías Abogabir. ES ESTO UNA FUENTE DE LIBRO O DE PÁGINA WEB? POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS DATOS SEGÚN EL FORMATO ENVIADO.
116. Delamaza, Gonzalo, 2011: Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Revista de la Universidad Bolivariana, volumen 10, N°30, 2011, pp. 45-75.
117. Ministerio de Desarrollo Social, 2013: Decreto Supremo N° 66 .
118. OIT (2014) Matías Abogabir. Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión.
119. DANE, 2016: Atlas Estadístico de Colombia, Bogotá, <http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/>.
120. Incluye carbón, níquel y petróleo y sus derivados de las exportaciones tradicionales del país para el 2016. Ibid.
121. No existe información oficial para establecer una repartición de ingresos a nivel nacional o central.
122. De acuerdo con las cifras del DANE, para 2016 el total de la población ocupada es de 22,8 millones. La definición de la población ocupada incluye personas en una de las siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
123. Observatorio de las industrias extractivas en Colombia, 2015: El sector extractivo en Colombia 2014, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, y otros, http://media.wix.com/ugd/ef61f6_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf.
124. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr
125. Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 2017: Tendencias de la Conflictividad Socioambiental en América Latina y Propuestas para su Abordaje, Quito, https://www.ffla.net/publicaciones/doc_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html.
126. Fundación Foro Nacional por Colombia, 2017: La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en Colombia, Bogotá: Foro Nacional por Colombia y Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/reporte-colombia.pdf>.

127. La Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 ("PND") clasifica los tipos de minería en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería.
128. Fundación Avina y Gestión Ambiental Estratégica, 2012. Elementos diagnósticos para una caracterización de la minería en Colombia. Bogotá, Colombia. Mesa de Diálogo permanente de Minería en Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?
129. Ley 34 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
130. Morales, Lorenzo, 2017. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible, Bogotá: Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf
131. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Bogotá, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>.
132. Morales 2017, cit arr.
133. Jiménez, Carlos Mario, 2017: En 6.3 % aumentó producción de carbón en el Cesar, <http://elpilon.com.co/en-6-3-aumento-produccion-de-carbon-en-el-cesar/>.
134. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar es la autoridad encargada por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
135. Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
136. Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Bogotá Colombia. En bibliografía consta el link: Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Disponible en: <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
137. <?> Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. Bogotá, Colombia. En bibliografía consta el link: Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
138. <?> Ministerio de Minas y Energía: Relacionamento Territorial, <https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial>.
139. <?> La Resolución 0322 de 2015 adopta el manual específico de funciones y competencias del Ministerio del Interior.
140. <?> La Ley 1444 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como organismo técnico con autonomía administrativa y financiera -sin personería jurídica- para el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. La ANLA debe asegurar que los proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento cumplan con la normativa ambiental (Decreto 3573 de 2011).
141. <?> Departamento Nacional de Planeación, 2016: Evaluación de operaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que mida la capacidad con la que cuentan para lograr sus objetivos y proponer acciones de mejora para el fortalecimiento integral de las mismas y el mejoramiento de la gestión ambiental en el país, Bogotá, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR_Producto_4_Informe_Resultados_v20161128.pdf
142. <?> Ministerio de Ambiente, 2013: Decreto 2613 de 2013 por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa, http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec_2613_2013.pdf.
143. <?> Lloreda Francisco, presidente ACP. Septiembre 2017. III Congreso de la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo ACP. Bogotá, Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
144. La fuente de todas las cifras de 2016 es: PEMEX, 2016: Anuario Estadístico 2016, México, pp. 5-6 y 15-16, <http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico-2016.pdf>. La fuente del valor de 2010 es: González, Ixel, 2015: Petróleo aporta menos al crecimiento del PIB en 2014, México, <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-aporta-menos-al-del-pib-en-2014.html>.
145. Los datos nacionales estadísticos no desglosan por industria de hidrocarburos.
146. Centro Mexicano para la Filantropía, 2017: Número de organizaciones en cada estado por figura legal, <http://200.57.117.52/Directorio2/Estadisticas/frmoOrganizacionesFiguraLegal.aspx>.
147. El amparo en un amplio sentido se revela como un conjunto de actos procesales o procesos que culminan en resolución judicial o sentencia, que constituye su causa final común, y en un sentido estricto, como un derecho, como una potestad que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales. La Constitución mexicana de 1917 establece como órgano de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, y dispone que a través del amparo pueden impugnarse actos o leyes de cualquiera de los tres Poderes, creando así el juicio de amparo en contra, también, de resoluciones judiciales. Consultado en: Ensayos Universitarios GMORR, 2009: Juicio de amparo en México, <https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/>
148. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
149. Enciso, Angélica, 2016: Hay en México 420 conflictos socioambientales: Investigador, <http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038n1soc>.
150. David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética. Director General del proyecto Energía a Debate; y Jorge Arriaga, PhD en Desarrollo Regional por la Universidad de la Sorbona en París; fue Subgerente de Atención a Organizaciones Sociales en PEMEX y actualmente es consultor para la industria energética.

151. "En primer lugar, la ASF (Auditoría Superior de la Federación - SC) señala que existen vacíos normativos, toda vez que los Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos no establecen líneas claras sobre el seguimiento de la aplicación de los recursos y bienes. Lo anterior deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios", en: De la Fuente López, Aroa, 2017: Donativos y Donaciones de PEMEX: Deficiencias e Irregularidades, México, pp.2-3, <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ASF-Donativosydonaciones.pdf>.
152. Morris, Stephen, 1992: Corrupción y Política en el México Contemporáneo, México, pp. 76-79, https://books.google.com.mx/books?id=H1_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=_oDNsdtrNbJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTqMkt5_rYAhWQ7VMKHdw1CYyQ6AEIzDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false.
153. Diario Oficial de la Federación, 2014: Ley de Hidrocarburos, México, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014.
154. Entrevistas con académicos y académicas expertos en energía.
155. Entrevistas con actores sociales en el marco de este diagnóstico.
156. Secretaría de Energía, 2016: 4º Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2015-2016, México, pp. 69, http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf.
157. A noviembre del 2017, el gasoducto aún tenía parada la operación en el tramo Guaymas- El Oro. Consultado en: Zúñiga, Norma, 2017: Pide CFE liberar ducto Guaymas-El Oro, México, <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1262784&md5=0164b194d21007299490c50495577918&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>.
158. Resolutivo de la consulta previa, libre e informada del gasoducto Sonora. Consultado en: Gob.mx, 2015: Resolutivo de la CPLI a la Tribu Yaqui, México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf.
159. Comentarios al diagnóstico del Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
160. Tribunales federales ordenaron a los tres órganos de gobierno frenar el gasoducto. Consultado en: Escobar, Amalia, 2017: Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto, México, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/27/tribunal-ordena-secretarias-frenar-obras-de-gasoducto>.
161. Las entrevistas, con los diferentes actores en cada proyecto y con funcionarios de organizaciones de la sociedad civil permiten realizar esta aseveración, que de ninguna manera pretende ser generalizada.
162. Es decir, las formas históricas clientelares han tenido que cambiar por formas basadas en acuerdos internacionales para llevar a cabo la consulta indígena, por ejemplo, en donde la información previa y la consulta son un principio que se debe respetar.
163. Empresa filial de PEMEX que financia el proyecto.
164. El Plan de Gestión Social se incluye en los lineamientos que establece la Secretaría de Energía (SENER) para la evaluación de impacto social contemplada en la Ley de Hidrocarburos. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, www.cofemeresimr.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300.
165. En los lineamientos de la Evaluación de Impacto Social (Evis), uno de los requisitos es que la empresa debe presentar su Plan de Gestión Social dentro de la Evis.
166. Informe de labores de la Secretaría de Energía, Marco Legal y Participación en EITI y otros espacios regionales y bilaterales. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016, cit. arr., p. 5 y p. 160.
167. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.
- 168.
169. Se retoma esta ley en el reporte, ya que el gas natural es un insumo que va en crecimiento para la generación de energía eléctrica. Las atribuciones son claras para el momento de la extracción y transporte del gas y cada instancia reguladora.
170. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018, México, <https://www.gob.mx/sgm>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018: Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), México, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/>.
171. Estas cifras no incluyen información de las empresas prestadoras de servicios y tampoco incorpora información de la minería artesanal y de pequeña escala.
172. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2017: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, México, <https://www.gob.mx/sedatu>.
173. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
174. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018: Informe Anual 2018, México.
175. Saade Myriam, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los Casos de Colombia, México y el Perú. Santiago de Chile, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1.
176. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
177. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
178. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
179. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2017: Informe Anual 2017. México.
180. CCC forma parte de una red de organizaciones denominada Partners.
181. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
182. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.
183. Secretaría de Economía (SE), 2016: Manual de Inversionistas en el Sector Minero Mexicano, México, <https://www.gob.mx/se/documentos/manual-del-inversionista-en-el-sector-minero-mexicano?state=published>.
184. Poder Judicial Federal, 2016: Tesis 2a.XXVIII/2016(10a), número de registro 2011955 Materia Constitucional, p. 1211, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio 2016, Tomo II.
185. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2016, México, <https://www.gob.mx/sgm>.
186. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.

183. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 1990: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, México, <http://www.contactopyme.gob.mx/mercados/info/secofi.html>.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
184. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
185. Los pasivos ambientales fueron el resultado de las operaciones de otras empresas entre las que se encuentran ASARCO, la cual posteriormente vendió sus concesiones a Grupo México. Durante la operación de estas empresas, México carecía de regulación ambiental, por lo que la remediación de los pasivos ambientales no era una exigencia para las empresas.
186. Un total de 490.000 m³ de suelo vegetal recuperado y almacenado para acciones de restauración.
187. Este proyecto tendrá un costo de más de 2 millones de dólares, ya que se requiere retirar y encapsular los contaminantes que fueron depositados por las otras empresas como parte del proceso de remediación. Es relevante destacar que New Gold, como estrategia para garantizar y cumplir con los compromisos definidos como parte de su plan participativo de cierre ambiental, cuenta con una fianza pagada ante la tesorería de la Federación por casi 30 millones de dólares que respalda el 100% del cierre biofísico y socioeconómico. De manera que el "Patio Paseo Victoria" es hoy en día una de las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras en este municipio.
188. Los "Pueblos Mágicos" es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en México desde el año 2001, para promover la oferta turística en el país, en sitios en donde sus habitantes y gobiernos locales han logrado proteger su riqueza cultural, por lo que son reconocidos como sitios que tienen grandes atributos históricos-culturales. En estos lugares se promocionan las artesanías, festividades, gastronomía del lugar, así como productos turísticos basados en la aventura, senderismo o ecoturismo.
189. New Gold Minería San Xavier S.A de C.V Cerro de San Pedro, 2015: Reporte de Sustentabilidad 2015, México, http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf.
190. Incluye Sonora (Nacozari, Esqueda, Guaymas y Cananea); Coahuila (Nueva Rosita); San Luis Potosí (Charcas y San Luis Potosí); Chihuahua (Santa Bárbara y Santa Eulalia); Michoacán (Angangueo); Zacatecas (Sombrerete); Guerrero (Taxco); Guanajuato (León); Oaxaca (Juchitán); Campeche (Ciudad del Carmen), y Baja California Sur (Guerrero Negro).
191. *Industria*: los representantes del sector industrial incluyen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Estas organizaciones agrupan a las principales empresas del sector de hidrocarburos en México y a las empresas mineras que generan aproximadamente 90% de la producción minera del país. *Sociedad civil*: los representantes de la sociedad civil fueron elegidas por un grupo de aproximadamente 40 OSC, que fueron invitadas e informadas en talleres nacionales y regionales sobre la intención del gobierno de adherirse a este estándar por un grupo impulsor conformado por Transparencia Mexicana, FUNDAR y PODER. Se eligió un grupo de representantes y suplentes que está conformado por: PODER, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSTA), Transparencia Mexicana (TM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En la actualidad, ALCOSTA no forma parte de este grupo de representantes y suplentes. El gobierno conformó un Grupo Intersecretarial (GI) integrado por medio de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) (por medio de la Subsecretaría de Minería) y la Subsecretaría de Hidrocarburos (SENER). Actualmente, la responsabilidad de presidir el GI está a cargo de la Subsecretaría de Minería.
192. USAID, Banco Mundial, Natural Resource Governance Institute, GIZ, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada Británica.
193. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2016: Informe Anual 2016, México.
Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
194. Secretaría de Economía (SE), 2016, cit. arr.
195. (1) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (Nuevo León), (2) Universidad Veracruzana (Veracruz), (3) Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila), (4) Universidad de Colima (Colima), (5) Universidad de Guanajuato (Guanajuato), (6) Universidad Autónoma del Estado de México (México), (7) Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), (8) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Chiapas), (9) Universidad de Sonora (Sonora), (10) Universidad Autónoma de Puebla (Puebla), (11) Universidad Estatal de Sonora (Sonora), (12) Universidad Politécnica Juvenino Rosas (Guanajuato), (13) Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Hidalgo), (14) Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Zacatecas), (15) Instituto Tecnológico de Chihuahua (Chihuahua), (16) Instituto Tecnológico de Morelia (Morelia), y (17) Instituto Tecnológico de Querétaro (Querétaro).
196. Unversia México, 2016: Licenciaturas en Ingeniería en Minas, <http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715>.
197. Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Transparencia Mexicana (TM), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSA), los Socios México/Centro de Colaboración Cívica (CCC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, CartoCritica, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Amigos del Río San Rodrigo, Oxfam, The Nature Conservancy, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Fundación Heinrich Böll, Fundación Desarrollo Sustentable A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES).
198. Saade Myriam, 2013, cit. arr.
Temper Leah, del Bene Daniela y Joan Martínez-Alier, 2015, cit. arr.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 2018, cit. arr.
Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014, cit. arr.
Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
199. Díaz, Luis y Morones Guadalupe, 2001: Inversión extranjera; derecho mexicano y derecho internacional, Edición 01, México: Themis.
200. Poder Judicial Federal, 2016, cit. arr.
201. Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017: Anuario Minero 2016, Lima, <https://es.scribd.com/document/351009672/ANUARIO-MINERO-2016-pdf>.

202. EY, 2018: Informe Final Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016. Consultoría para la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Lima, http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf.
203. Ministerio de Energía y Minas, 2017: Anuario Minero 2016, Lima, p. 118.
204. Lamentablemente no existen cifras accesibles para el sector hidrocarburos.
205. Defensoría del Pueblo, 2018: La Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos sociales a diciembre de 2017, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=19531>.
Defensoría del Pueblo, 2017: Reporte de Conflictos Sociales N.º 166, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-166---Diciembre-2017.pdf>.
206. Lanegra Iván, 2016: ¿Qué está en juego con la elección del Defensor del Pueblo?, Lima, <http://ojo-publico.com/294/que-esta-en-juego-con-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo>.
207. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
208. Glave Manuel y Kuramoto Juana, 2007: La minería peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber, Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Grade, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, pp. 135-181.
209. Baca Epifanio, 2015: Estudio sobre Marco Normativo Minero en Perú Lima, <http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Estudio%20EBaca.pdf>.
210. Participaron el Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Arequipa, diez municipalidades distritales, la asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores, el COFREN, el FREDICON, CONREDE, Comité de Gestión Ambiental de Uchumayo.
211. ONU Mujeres, La mujer y el medio ambiente, <http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment>.
212. Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental en el Perú Un acuerdo fruto del diálogo y las lecciones aprendidas, <http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/Visión-Minería-2021.pdf>.
213. Cooperación, 2017: Actualidad Minera del Perú, No. 222, <http://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/AMP-diciembre-2017.pdf>.
214. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de los Conflictos y la Gobernabilidad, 2017: Competencias en la atención de conflictos sociales, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=6>.
215. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2018: Poder Ejecutivo presenta Proyecto de Ley que pretende modificar Ley Orgánica de Hidrocarburos favoreciendo al sector privado y en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente, <http://www.dar.org.pe/noticias/poder-ejecutivo-presenta-proyecto-de-ley-que-pretende-modificar-ley-organica-de-hidrocarburos-favoreciendo-al-sector-privado-y-en-detrimento-de-los-pueblos-indigenas-y-el-medio-ambiente/>.
Scurrah Martin y Chaparro Anahí, 2014: La participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas: Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería y los hidrocarburos en el Perú, Lima, <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20y%20la%20consulta%20previa%20en%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20-%20M.%20Scurrah%20y%20A.%20Chaparro.pdf>.
216. CEPAL y OCDE 2016: Evaluaciones del desempeño ambiental Perú. Aspectos destacados y recomendaciones, Santiago, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40171-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru-2016-aspectos-destacados-recomendaciones>.
217. EY, 2018, cit. arr.
218. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018: La Participación Ciudadana en la Actividad de Hidrocarburos, http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=3556.
219. Milano Flavia y Sanhueza Andrea, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, Washington, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7499/Consultas-publicas-con-sociedad-civil-Guias-para-agencias-ejecutoras-publicas-y-privadas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
220. Ministerio de Cultura, 2015: Derecho a la Consulta Previa Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa, Lima, <http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Guia-Metodologica-para-la-Facilitacion-de-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf>.
221. Con respecto a los proveedores para la minería, el país no cuenta con datos registrados
222. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Real, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/.
223. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Externo, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/.
224. Datos levantados para este diagnóstico por la consultora apoyados en el Banco Central de la Republica Dominicana, encuestas directas a las empresas metálicas, y el Ministerio de Energía y Minas.
225. El dueño de Falcondo es American Nickel.
226. Ley 176-07
227. Ley 200-04
228. Thomen Ginebra, Cristina, 2012: Informe País - Trabajo Final Diplomatura Industria Extractiva, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, Julio 2012, Santo Domingo, República Dominicana.
229. Dirección General de Impuestos Internos, 2015: Ranking de Empresas 2015, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/Ranking%20de%20Empresas%202015.pdf>.
230. Dirección General de Impuestos Internos, 2016: Ranking de Empresas 2016, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/RankingEmpresas2016.pdf>.
231. Salvo los proyectos de la minera Falcondo, realizados a través de su rama de responsabilidad social Fundación Falcondo que iniciaron en 1989.
232. En 2007 PVDV empezó sus programas de responsabilidad social.
233. Barrick Pueblo Viejo: Estudio demuestra la sostenibilidad de los proyectos sociales implementados por Barrick Pueblo Viejo, Santo Domingo D.N, <http://barrickpuebloviejo.do/noticias/estudio-demuestra-la-sostenibilidad-de-los-proyectos-sociales/2016-10-13/144111.html>.
234. FOMISAR Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, <http://www.fomisar.com/>.

235. Oro Información, 2017: Las cinco mayores minas de oro del mundo. <https://www.oroinformacion.com/es/OroInformacion/metales/487/Las-cinco-mayores-minas-de-oro-del-mundo.htm>.
236. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
237. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
238. Los resultados a favor fueron con 86,22% en Maimón, 98,66% en Cotuí y 98,78% en Fantino (véase Planes de Desarrollo publicados por los ayuntamientos de Maimón, Cotuí y Fantino).
239. Son los órganos de participación ciudadana directamente relacionados con la planificación municipal, ver: Malagón, Angela, y Rosa Arlene María, 2012: Guía para la Creación del Consejo Económico y Social Municipal, Santiago de los Caballeros: Federación Dominicana de Municipios, <http://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2016/05/Guia-CES-FEDOMU-final.pdf>.
240. Bonilla, Teófilo, 2013: Diputados aprobaron renegociación de contrato con Barrick Gold, <http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>.
241. Barrick Pueblo Viejo, Responsabilidad Social Corporativa, <http://barrickpuebloviejo.do/responsabilidad-social/responsabilidad-social-corporativa/2016-10-13/122340.html>.
242. El Dinero, 2015: El lado amable de Barrick Pueblo Viejo - La minera dice que su accionar ha sido positivo en la provincia Sánchez Ramírez, <https://www.eldinero.com.do/10147/el-lado-amable-de-barrick-pueblo-viejo/>.
243. Al Momento, 2015: Barrick Pueblo Viejo inicia programa "una Computadora por Niño" en RD, Santo Domingo, <http://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-inicia-programa-una-computadora-por-nino-en-rd/>.
244. El Veedor Digital, 2015: ENDA y la Barrick extienden proyecto para reforestar Piedra Blanca-Los Haitises, Santo Domingo, <http://elveedordigital.com/provincias/item/6431-enda-y-la-barrick-extienden-proyecto-para-reforestar-piedra-blanca-los-haitises>.
245. Álvarez, Yulissa, 2017: La piscicultura, un atractivo ecoturístico de Cotuí La actividad, apoyada por la Barrick, impulsa el desarrollo de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí, <https://www.eldinero.com.do/40640/la-piscicultura-un-atractivo-ecoturistico-de-cotui/>.
246. Listín Diario, 2017: Inician trabajos de electrificación, Sánchez Ramírez, <https://www.listindiario.com/economia/2017/10/05/485133/inician-trabajos-de-electrificacion>.
247. Véase: Buena Práctica: 2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales
248. RD\$2'000.000,00, tasa de cambio del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) para diciembre 2017.
249. Basado en cálculos estimados de la incubadora por efectos del aumento de empleo producto de las mineras y del aumento estimado de población calculado por The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a un 1,7% anual de incremento de población. El link de acceso a The World Factbook es: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
250. Matos, Heidi, 2012: Más de 4 millones de pesos para microempresarios de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, Cotuí, <http://eljacaguero.com/mas-de-4-millones-de-pesos-para-microempresarios-de-sanchez-ramirez-y-monseñor-nouel/>.
251. Acento, 2016: INFOTEP y Fundación Rica entregan Premio Nacional a la Excelencia 2016, Santo Domingo, <https://acento.com.do/2016/sociales/8391590-infotep-fundacion-rica-entregan-premio-nacional-la-excelencia-2016/>.
252. Barrick Pueblo Viejo, Inician proyecto de emprendimiento para personas con capacidades motoras especiales, Sánchez Ramírez, <https://www.barrickpuebloviejo.do/inician-proyecto-de-emprendimiento-para-personas-con-capacidades-motoras/2017-10-20/184050.html>.
253. Severino, Jairon, 2016: Minería aporta RD\$226,023 millones a economía dominicana desde 2010 Su ponderación promedio en el PIB se mantiene en 1.73%, Santo Domingo, <https://www.eldinero.com.do/31719/la-mineria-ha-agregado-rd226023-millones-a-economia-dominicana-desde-2010/>. Conversión a dólares según la tasa de cambio del Banco Central de junio 2016
254. Según censo del 2010. Consultado en: Oficina Nacional de Estadística, 2008: Monseñor Nouel en Cifras Perfil Sociodemográfico Provincial, https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monseñor_nouel.pdf.
255. Equivalentes a RD\$335'475.957 a la tasa vigente del Banco Central de la República Dominicana al cierre de diciembre de 2017.
256. Oficina Nacional de Estadística, 2008, cit. arr.
257. Corresponde a RD\$ 54'024.173 según tasa Banco Central RD al 31 diciembre 2017.
258. Wikipedia, 2017: Proyecto Pueblo Viejo, https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Pueblo_Viejo.
259. Barrick Pueblo Viejo, Nuestra historia, <http://barrickpuebloviejo.do/informacion-general/nuestra-historia/2016-10-11/163729.html>.
260. La firma BGC Engineering Inc, de Canadá elaboró el Plan de Cierre para Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) 31 de Julio de 2013, Proyecto No: 0011-159 -. Consultado en: BGC Engineering Inc, 2013: Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo: Mejita, Cumba, Hondo, Pendiente Oeste y Desechos Peligrosos Final,, https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan_de_Administraci%C3%B3n_Medioambiental_del_Estado_1era_y_2da_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf.
261. Diario Libre, 2007: Contaminación afecta aún entorno de mina Pueblo Nuevo sufre las secuelas de la explotación, <https://www.diariolibre.com/noticias/contaminacion-afecta-entorno-de-mina-INDL148462>
262. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, <http://camiperd.org/category/documentos/guias-mineras/>.
263. El Día, 2013: Barrick Gold y la historia de un contrato muy complejo, Santo Domingo, <http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/>.
264. Diario Libre, 2014: Expertos se oponen a que el Senado declare Loma Miranda como Parque Nacional Afirman que la decisión sería inconstitucional, Santo Domingo, <https://www.diariolibre.com/noticias/expertos-se-oponen-a-que-el-senado-declare-loma-miranda-como-parque-nacional-ANDL636701>
265. Marcha Verde, <https://marchaverde.com/>.
266. Paula, Elexido, 2017: Marcha Verde: Patrimonio del Pueblo, <http://hoy.com.do/marcha-verde-patrimonio-del-pueblo/>.

267. Fundación Acción Verde, 2009: Declaración de La Comisión Ambiental de la UASD sobre la construcción de una Cementera, <http://www.accionverde.com/declaracion-de-la-comision-ambiental-de-la-uasd-sobre-la-construccion-de-una-cementer/>. Maimón Punto de Encuentro, Presidente de la Comisión Ambiental de la UASD habla sobre la minería en el país (Video), Maimón, <http://maimonpuntodeencuentro.blogspot.com/2015/09/presidente-de-la-comision-ambiental-de.html>
268. EFE, 2014: El padre Rogelio Cruz llama a la desobediencia civil por caso Loma Miranda, Santo Domingo, <https://www.listindiario.com/la-republica/2014/09/04/336184/el-padre-rogelio-cruz-llama-a-la-desobediencia-civil-por-caso-loma-miranda>.
269. Hoy, 2017: Marcha Verde reclama pago de RD\$3,000 millones a provincia Sánchez Ramírez, <http://hoy.com.do/marcha-verde-reclama-del-gobierno-pago-de-rd3000-millones-a-provincia-sanchez-ramirez/>.
270. Participación Ciudadana: ¿Qué es PC?, https://pciudadana.org/?page_id=4893.
271. Ver Grupo BID-sociedad civil Estrategia de Relacionamiento, 2018
272. Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
273. Publique lo que pagan, 2018: Objetivos, encontrado en: <http://www.publishwhatyoupay.org/es/quienes-somos/objetivos/>.
274. En la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales (2.7.3.1., p. 137), Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile (2.1.3.3., p.29), Mesa de Diálogo de Huari, Perú (2.6.3.3., p. 120).
275. Devonshire Initiative, 2017: About us, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/about-us/>.
276. Devonshire Initiative, s/a: Partnering and Partnerships: lessons learned in the DI, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/wp-content/uploads/DI-Partnership-Lessons-Learned-FINAL-.pdf>.
277. Es una plataforma de intercambio y comunidades de aprendizajes sobre el tema de conservación de la biodiversidad, apoyada por GEF, Convención sobre Diversidad Biológica, UN Environment y PNUD, ver: NBSAP Forum, 2018: Welcome to the NBSAP Forum, encontrado en: <http://nbsapforum.net/>.
278. Goxi es una comunidad virtual sobre gobernanza en industrias extractivas, apoyada por el Banco Mundial y PNUD, ver: GOXI, 2018: Guidelines for how to use GOXI, encontrado en: www.goxi.org.
279. GOXI, 2018: GOXI learning series, encontrado en: <http://goxi.org/page/goxi-learning-series>.
280. Entrevista Ricardo Morel Ex Vicepresidente de Antamina y ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha y Angloamerican.
281. Intervención de Raúl Benavides Vicepresidente de Negocios de Buenaventura en reunión del Grupo de Diálogo Directo Noviembre del 2016

